

FOJA: 381 .- trescientos ochenta y
uno .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-22123-2012
CARATULADO : EMPRESA NANDWANI LIMITADA /
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCI

Santiago, veintiséis de Febrero de dos mil veintiuno

VISTOS:

En estos autos **Rol N° C-22.123-2012 de este 27º Juzgado Civil de Santiago**, a fojas 1 y siguientes y rectificación de fojas 53, se presenta don Santiago Montt Vicuña, abogado, en representación convencional de **EMPRESAS NANDWANI LIMITADA**, sociedad del giro actividades inmobiliarias, domiciliada en calle Errázuriz N°853, 3º piso de la Ciudad de Punta Arenas, y para estos efectos en calle Amunátegui 277, oficina 900, comuna de Santiago, y deduce **demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la responsabilidad legal establecida en el artículo 23 de la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada**, que indica, en contra de **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS o SBIF**, organismo público, autónomo, con personalidad jurídica de duración indefinida, representada legalmente por el Sr. Raphael Bergoeing Vela, ambos domiciliados en Moneda 1123, comuna de Santiago; en contra de **SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS O SINACOFI**, sociedad representada por su gerente general Sr. Fernando Contardo Díaz Muñoz, factor de comercio, ambos domiciliados en Avenida Nueva Costanera 4091, piso 2, comuna de Vitacura; y, en contra de **BANCO SANTANDER CHILE**, sociedad del giro de su denominación, representada por su Gerente General don Claudio Melandri Hinojosa, favor de comercio, ambos domiciliados en calle Bandera N°140, comuna de Santiago, a objeto que, se declare la responsabilidad que les cabe a los demandados en el manejo erróneo de información financiera de la actora Empresa Nandwani Limitada, el que tomó conocimiento de ello con fecha 26 de marzo de 2009 y que aparecía publicado en el “Estado de deudores” que hace la SBIF y en Dicom con una



deuda por “cartera vencida” de más de \$250.000.000, lo que le provocó grandes perjuicios económicos, según relata en el cuerpo de su libelo, con lo cual se transgredió en primer lugar la normativa establecida en la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal, específicamente en su artículo 23; y, **en subsidio**, según lo establecido en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, ya que sin duda se trató de un hecho negligente por parte de uno o de más de los demandados, que provocó daño en el patrimonio de su representada, y que debe ser indemnizado por el responsable; todo lo anterior, con costas de la causa.

A fojas 29, rola atestado receptorial en el que consta con fecha 25 de marzo de 2013 la notificación conforme el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a **Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras o SINACOFI**, efectuada al representante don Fernando Contardo Díaz Muñoz.

A fojas 30, rola atestado receptorial en el que consta con fecha 26 de marzo de 2013 la notificación personal al **Banco Santander Chile**, efectuada al representante legal don Claudio Melandri Hinojosa.

A fojas 31, rola atestado receptorial en el que consta con fecha 26 de marzo de 2013 la notificación personal a la **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras**, efectuada al representante legal don Raphael Bergoeing Vela.

A fojas 49, comparece don Sergio Rojas Abarzúa, abogado, por la demandada **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, contestando la demanda**, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas.

A fojas 76, comparece don Juan Pablo Prieto Saldivia, abogado, por la demandada **Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. (SINACOFI), contestando la demanda**, quien al tenor de los hechos que reseña y fundamentos de derecho, solicita rechazo en todas sus partes, con costas.

A fojas 88, comparece doña Senda Villalobos Indo, abogada, por la demandada **Banco Santander Chile, contestando la demanda**, solicitando su total rechazo, con expresa condena en costas.

A fojas 111, la demandante evacúa el trámite de **réplica**, analizando las contestaciones efectuadas por las demandadas y reiterando las alegaciones consignadas en el libelo.



A fojas 121, la demandada Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. evacúa el trámite de **dúplica**.

A fojas 125, por su parte, el demandado Banco Santander Chile evacúa el trámite de **dúplica**.

A fojas 137, se llevó a efecto **audiencia de conciliación** en rebeldía de la demandante y en presencia de los apoderados de las demandadas, constando que llamadas las partes a conciliación, esta no se produce.

A fojas 141 y 142, se **recibe la causa a prueba**, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los que acogíendose reposición son modificados en sus puntos 1 y 3 en los términos contemplados en resolución escrita a fojas 275, rindiéndose por las partes la prueba que obra en autos.

A fojas 355 y 362 consta que se **citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PEIMERO.- Que, en estos autos ha comparecido don Santiago Montt Vicuña, abogado, en representación convencional de **Empresas Nandwani Limitada** y deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por la responsabilidad legal establecida en el artículo 23 de la Ley 19.628 sobre protección a la vida privada, en contra de **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o SBIF**, representada legalmente por el Sr. Raphael Bergoeing Vela; en contra de **Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras O SINACOFI**, sociedad representada por su gerente general Sr. Fernando Contardo Díaz Muñoz; y, en contra de **Banco Santander Chile**, representada por su Gerente General don Claudio Melandri Hinojosa, por la responsabilidad legal que les cabe en el manejo erróneo de información financiera de la actora, el que tomó conocimiento con fecha 26 de marzo de 2009 que aparecía publicado en el “Estado de deudores” que hace la SBIF y en Dicom con una deuda por “cartera vencida” de más de \$250.000.000, lo que le provocó grandes perjuicios económicos, ya que en **primer lugar** vio estancados algunas operaciones de comercio exterior, por falta de crédito bancario para poder operar y **segundo**, señala que significó un descrito en la industria y social, ya que generó un estado de desconfianza en la banca con respecto a su representado, el que requiere contar permanentemente con crédito bancario para operar por la naturaleza de las operaciones que realiza. Agrega que la responsabilidad legal que está



establecida en la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de carácter personal específicamente en su artículo 23, por cuanto la información recabada por la SBIF constituye una base de datos en la cual participan los 3 demandados sin que a la fecha haya posible determinar si el error en su constitución y publicación fue causado por uno o más de los demandados. **En subsidio** de lo anterior, basa su acción en las normas sobre responsabilidad extracontractual establecidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, ya que se trató de un hecho negligente por par de uno o más de los demandados que provocó daño en el patrimonio del actor y que debe ser indemnizado por el responsable.

Inicia el desarrollo de su libelo bajo el título “**CUESTIONES PRELIMINARES**” indicando que, el actor era titular de las siguientes cuentas corrientes: i) la primera, una en cuenta en pesos número 37749-0; ii) la segunda una cuenta en dólares, número 5100011559, ambas contratadas con el demandado Banco Santander Chile S.A. Señala que mediante dicho contrato el demandado se obligó a custodiar y administrar los dineros que depositara el demandante. Añade que, le suministraba diversos otros productos, tales como la gestión de cartas de crédito para compraventas internaciones, inversiones, créditos, etc., obligaciones que fueron cumplidas por la demandante de autos, por lo que contaba con un bajísimo nivel de riesgo crediticio.

Afirma que, la actora es una compañía con gran prestigio en la Región de Magallanes con 16 años de trayectoria en el mercado, dedicado a la importación de todo tipo de productos, desde bienes de uso doméstico hasta automóviles, abarcando un gran mercado en Punta Arenas, contando con gran confianza por parte del público local, uno de sus mayores activos, por su larga trayectoria y por los muchos años de trabajo de la familia Nandwani la que es conocida por haberse dedicado siempre al comercio, principalmente importaciones en la zona austral del país.

Indica que debido al giro de la actora debe trabajar con cheques a fecha y/o cartas de crédito ya que permanentemente está importando distintos bienes en gran cantidad, por lo que debe contar, necesariamente con una línea de crédito en instituciones bancarias, siendo un elemento indispensable para operar.

Prosigue en el Capítulo II “**FUNDAMENTOS DE HECHO**” señalando que con fecha **26 de marzo de 2009** por intermedio de su representante legal Laju Nandwani recibió un llamado telefónico del Banco



Corp Banca en donde es cliente Empresas Nandwani Limitada, y por el cual le dijo que la tramitación de la renovación de su línea de crédito se encontraba sin aprobación ya que la referida empresa registraba un informe por cartera vencida por la suma de \$251.102.000 en el reporte que entrega la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, motivo por el cual no era posible seguir operando en la Banca, atendido el grave antecedente limitante para las operaciones de ese tipo.

Añade que, por la grave información recibida solicitó de inmediato el informe de la SBIF, el que efectivamente arrojó la información de cartera vencida informada por el demandado Banco Santander Chile, institución donde la actora mantenía cuenta corriente y algunas operaciones de crédito.

Hace presente que teniendo dicho antecedente se puso en contacto con el Banco Santander el que con fecha 27 de marzo de 2009 envió a la actora un detalle con su deuda la que no incluía la supuesta deuda de \$251.000.000 que aparentemente habría informado a la SBIF, por lo que reconoce que esta deuda no existe ni existió nunca.

Señala que sin perjuicio de lo anterior, y donde radica el fundamento de su demanda, es que en ningún caso y bajo ningún concepto su representada mantenía deudas por esos montos con la institución bancaria demandada y menos que estos hubiesen estado impagos, por más de 90 días, al punto de ser considerado como cartera vencida.

Agrega que al conocer esta información errónea requirieron a la sucursal del Banco Santander Santiago en Punta Arenas, una explicación sobre el origen de la publicación. Señala que la institución bancaria no dio respuesta satisfactoria alguna y tampoco respondió las cartas enviadas por Empresas Nandwani, en clara señal de no tener una respuesta lógica.

Afirma que el daño que esto produjo en el patrimonio de la actora es tremendo, ya que al ser incluida arbitraria e ilegalmente en el informe de carteras vencidas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se vio privado absolutamente de emprender varios negocios que se traducen, a modo ejemplar, en la imposibilidad de renegociar las líneas de crédito con las instituciones bancarias con las que funciona regularmente y abrir otra, como sucedió con el Banco BCI, quien le negó de plano dicha opción. Asevera que además, se vio en la imposibilidad de adquirir diversos productos que forman parte de sus giros los que habitualmente y por razone de mercado son adquiridos con cheques a fecha o caras de crédito, por lo que el daño es evidente.



Continúa expresando que atendido la gravedad de los hechos descritos y además al no tener respuesta de la entidad bancaria, su mandante procedió a presentar un Recurso de Protección contra dicho banco ante la Il. Corte de Apelaciones de Punta Arenas con fecha 14 de abril de 2009 bajo el Rol 27-2009. Indica que dicho Recurso estaba motivado en el hecho que la publicación en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras constituyó un acto arbitrario e ilegal que provocó al actor una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de su libertad para adquirir todo tipo de bienes, derecho protegido a nivel constitucional en el artículo 19 N°23, por lo que solicitó que se tomaran las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Añade que, en dicho recurso, acompañaron un documento consistente en Boletín de información consolidada de deudas de la actora de Dicom, en el figura la deuda materia del recurso publicada como cartera vencida, documento del 26 de marzo de 2009, por lo que al menos hasta dicha fecha la actora tenía dicha deuda publicada.

Prosigue indicando que, fue el mismo Banco Santander el que señaló en el informe del Recurso de Protección que es la Subgerencia de Gestión de Información la que gestiona y canaliza la información que se remite a la SBIF, subgerencia que tiene asiento en Santiago. Informaron en dicha acción que, como institución bancaria, no enviaron a la SBIF la información sobre la deuda, si no que una deuda mucho menor de \$400.000 aproximadamente. Como fundamento de su defensa acompañaron copia de la impresión de los formularios de envío de información al sistema de financiera (SINACOFI) correspondiente a Empresas Nandwani Ltda. en los meses de diciembre de 2008, enero de 2009 y febrero de 2009, en los cuales aparecía sólo la deuda menor de \$400.000. Afirma que dichos formularios no tienen una fecha determinada, ya que donde dicen “fecha” se pueden ver los datos “200812”, “200901” y “200902” lo que sin duda no da luces sobre si los documentos fueron emitidos en las fechas que afirma el Banco Santander, sino por el contrario, en fechas distintas, por lo que no probó en definitiva sus asertos, esto es, que ellos no informaron a la SBIF de la supuesta deuda de Empresas Nadwani Ltda. por \$250.000.000. aproximadamente.

Expone que además, en su referido informe el Banco Santander acompaña informe de SINACOFI de fecha 29 de abril de 2009 donde aparece por un lado la deuda informada por el Banco Santander de \$400.000 aproximadamente y por otro lado, la deuda de \$251.000.000 aproximadamente



como crédito contingente, es decir, aquellas deudas sujetas a una condición suspensiva como lo son aquellas obligaciones en que el deudor se constituye como Avalista o Fiador, la emisión de Boletas de Garantía, Cartas de Crédito del Exterior confirmada, Cartas de Garantía Interbancarias, Líneas de crédito de libre disposición, Créditos Documentarios, etc. Indica que también acompañó un informe de Dicom en que la actora no aparece con la morosidad.

Destaca que el Banco Santander en su respuesta es enérgico en afirmar que no han sido ellos los que han informado la supuesta deuda por cartera vencida del demandante y que cualquier acción en orden a reclamar sobre esta situación se debe regir por un procedimiento distinto al recurso de protección. De esta manera, insinúa que sabe dónde estuvo el error, pero no lo dice, limitándose a defender su postura, sin aclarar lo sucedido.

Transcribe parcialmente el informe referido para continuar señalando que la respuesta no aclaró la situación ya que existía por un lado una supuesta deuda informada como cartera vencida, luego aparece la misma deuda como crédito contingente y finalmente fue borrada de los registros, con fecha 11 de mayo de 2009, luego de la vista de la causa de la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas de oficio, como medida para mejor resolver, ordenó a SBIF informar el nombre de la institución bancaria que le proporcionó la información relativa al crédito que fundamenta al presente recurso, ordenando adjuntar en dicho oficio copia de algunos documentos acompañados a los autos.

Expone que a pesar del mandato. el organismo requerido no contestó la pregunta ya que en ordinario 2018 ingresado con fecha 2 de junio de 2009 a la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas se limitó a señalar que la actora tenía deudas con 3 bancos y repitió la información aportada por terceros como por ejemplo lo que dice el Banco BCI en su carta de 2 de abril de 2009, que transcribe parcialmente.

Sostiene que lo que no aclara la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es que, según lo mostrado por el Banco Santander, la obligación que ellos habrían informado de más de 90 días era de \$400.000 no \$251.000.000 como reclamaba su representada, por lo que no se puede hablar de “coincidencia de información” en este caso. Reitera que la SBIF no responde algo tan simple como qué institución financiera le informó de esta deuda de \$251.102.000, pide siempre que se le requiera información al Banco Santander en una clara señal de no tener respuesta a la interrogante. Atendido que lo anterior no respondía a lo requerido el 15 de junio de 2009 se reiteró



oficio a la Superintendencia, ordenándole que contestara derechamente el oficio anterior y dijera quien le entregó la información referida.

Señala que atendido lo anterior la Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó con fecha 15 de junio de 2009, que se reiterara oficio a la Superintendencia, ordenándole que contestara derechamente el oficio anterior y dijera quien le entregó la información ya referida. Refiere que este segundo oficio fue respondido el 7 de julio de 2009 por medio de ordinario N°2889 en el que la SBIF señala que se ha limitado a enviar el oficio de la ltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas al Banco Santander para que ellos lo respondan, contrariando abiertamente la orden de la Corte, por lo que era ella quien debía contestar dicho oficio ya que además, la información que se le requirió la debe tener ella y nadie más obtuvo la información de haber existido una deuda de más de \$251.000.000 por parte de empresa Nandwani Limitada.

Afirma que la actitud evasiva de la Superintendencia se mantuvo, a tal punto que con fecha 9 de julio de 2009 la Corte de Apelaciones de Punta Arenas reitera nuevamente el oficio, bajo apercibimiento de sancionar a la SBIF con algunas de las medidas mencionadas en el artículo 15 del auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección. Esta orden fue contestada el 13 de julio de 2009, mediante ordinario 2889, repitiendo su respuesta anterior que había enviado los antecedentes al Banco Santander.

Agrega que frente a lo anterior el Banco Santander responde el oficio enviado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas repitiendo la misma información que dieron cuando evacuaron su informe como recurrido.

Indica que finalmente este recurso fue rechazado con fecha 31 de agosto del 2009 por la Corte Suprema por cuanto, según su razonamiento, de la prueba allegada al proceso se pudo dar por establecido que a la fecha de dictarse el fallo ya no existía la información de deuda que fue objeto del reclamo judicial, por lo que no era necesario tomar ninguna medida para hacer cesar el acto arbitrario y/o ilegal. Expone la actora que no se examinó el fondo del asunto sino que el máximo Tribunal desestimó el recurso atendido su naturaleza cautelar por cuanto ya no existía el riesgo que se pretendía anular con este recurso.

Asevera que nunca quedó claro donde se generó el error de información si fue el Banco Santander el que informó erróneamente a SINACOFI, si fue este organismo privado el que informó mal a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o si fue la SBIF la que



publicó mal la información y cambió una deuda informada de \$400.000 aprox. con una de \$251.102.000, irreal y muy distinto a lo que en realidad correspondía informar.

Agrega qué es esta situación de incertidumbre la que su parte quiso aclarar por medio de la medida prejudicial probatoria de exhibición de documentos con la que dieron inicio a los autos pero no fue posible dada la actitud permanentemente evasiva de los demandados cómo se expondrá.

En cuanto a la medida prejudicial probatoria indica que el objeto de ella fue requerir tanto a la SBIF como a SINACOFI, la exhibición de aquel documento sea carta, planilla, formulario, o el documento que sea, mediante el cual el Banco Santander les habría informado de la supuesta deuda de más de \$251.000.000 de su representada. Sin embargo, la SBIF que fue la primera en responder, se limitó a decir que atendido el tiempo transcurrido, no tenía esos registros, ya que no tenía información histórica sobre el “Estado de Deudores” que confecciona mes a mes.

Sin embargo, afirma tener numerosa información remitida por los Bancos respecto del endeudamiento de sus clientes, entre la que se encuentra información con similar contenido a la informada a través del Estado de Deudores y conforme a ello, pueden afirmar que a enero de 2009 el Banco Santander aparece informando una deuda de la actora de \$401.000. Refiere que luego, comparece SINACOFI excusándose de toda responsabilidad, afirmando que ellos no tienen ninguna injerencia en la información sobre el estado de sus deudores que los Bancos deben remitir a la Superintendencia, y que lo hacen por medio de su plataforma, ya que ella es y transcribe “ ..propietaria y administradora de un sistema “automatizado” para el tratamiento y procesamiento de información bajo especiales condiciones de seguridad y control. . “

Es decir, sostiene, se presenta como un mero intermediario sin responsabilidad alguna en la información que se intercambia entre Bancos y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sin embargo, no coincide con lo que ofertan en su página web, donde se presentan como un medio de “información” tanto de la SBIF como de los Bancos e Instituciones Financieras por lo que evidentemente existe y debe existir responsabilidad en la información que ellos presentan ya que es el servicio que ofrecen.

Finaliza este capítulo indicando que la acción deducida se dirige en contra de los 3 organismos señalados, ya que hasta ahora no existe claridad sobre el o los responsables de la información errónea que sufrió su



parte ya que ninguna de las entidades ha sido capaz de presentar una defensa certera y explicar cuál fue el error en el caso.

Continúa su acción en el Capítulo III “**DEL DERECHO**” señalando que este análisis lo dividirá en dos partes: la primera se referirá al marco legal del “Estado de Deudores” donde apareció la información errónea de que su representado tenía cartera vencida de \$251.102.000.- al Banco Santander; y luego, el marco legal de la acción que su parte interpone en su demanda de indemnización de perjuicios por la responsabilidad que les cabe a quienes causaron ese error.

Como prólogo a lo anterior explicita que el Banco Santander está sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, organismo público, autónomo, con personalidad jurídica de duración indefinida, el que tiene como función, conforme la Ley General de Bancos, el supervisar las empresas bancarias en resguardo de los depositantes y otros acreedores y del interés público, así como de otras entidades que señale la ley, y su misión es velar por la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero.

Indica que dentro de su función de fiscalización destaca el artículo 14 de la Ley General de Bancos que transcribe.

Agrega que la información a que se refiere el artículo 14 de la Ley General de Bancos está contenida en el documento elaborado mes a mes por la SBIF que recibe el nombre de “Estado de Deudores” y que contiene información sobre los deudores de los distintos bancos, sus deudas, características de ella y las garantías que se comprometen, base de datos alimentada por los mismos Bancos, los que están obligados a informar a la SBIF sobre estas materias.

Señala que en cuanto a la forma de dar cumplimiento está en el capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la SBIF sobre “*Información sobre deudores de las Instituciones Financieras*” la que señala cuáles son las operaciones de crédito que deben informarse, qué requisitos deben cumplir, información de los importes adeudados, responsabilidad en la entrega de la información, manejo de la información por parte de las instituciones financieras, oportunidad y forma de entrega de la información que se refundirá.

Prosigue comentando que en este punto el compendio de normas recién señalado dice lo siguiente y transcribe los numerales 4 y 5. , luego explica que en el referido “*Manual de Información*” se establece la forma



práctica en que cada banco debe dar cumplimiento a su obligación legal de informar a la SBIF del estado de sus deudores. Añade que tiene varias partes, una de las cuales son “Instrucciones Generales” y el restante se refiere a aspectos más específicos, como son el Sistema Contable, Sistema de Deudores, Sistemas de Productos, Tablas, Formularios, etc. Expone que el primer apartado, de “Instrucciones Generales” como su nombre lo indica, contiene instrucciones sobre la información estandarizada que debe enviarse de forma periódica o permanente. Refiere que a propósito de los horarios de entrega de información, dicho Manual se refiere a los canales o vías autorizadas, que son dos: i.- SINACOFI y ii.- La misma Superintendencia.

Luego, expone, en este mismo manual se regula el envío de información a través de archivos magnéticos, lo que está plenamente justificado por el volumen de información a entregar por bancos e instituciones financieras.

Agrega que en el apartado llamado “Archivos Magnéticos” se señala y transcribe.

Es decir, continua, los Bancos tienen la opción de informar directamente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de hacerlo mediante SINACOFI.

Hace presente que SINACOFI es un organismo privado formado en 1987 por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. Cuyo objetivo principal es la administración, operación y desarrollo de una red electrónica para apoyar la acción comercial y operativa de las instituciones financieras de nuestro país como mediante el intercambio de información de valor. Esto lo realiza por medio del desarrollo de actividades relacionadas con el procesamiento de datos mediante sistemas computacionales, sistemas automatizados de transferencia e información y la prestación de servicios de información a la industria bancaria y al mercado en general.

Luego agrega, debido al giro recién descrito, ésta se rige principalmente por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada la que establece parámetros en base a las cuales se puede almacenar y difundir información sobre las personas. Reitera que SINACOFI ha sido mandatado por la misma Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para recibir información que por ley, deben entregar los bancos a instituciones financieras a la señalada SBIF, razón por la cual también es demandada, ya que es parte importante en la entrega de información del Banco Santander a la SBIF y en la información que manejan los mismos bancos.



Continúa señalando, que a diferencia de lo que afirma SINACOFI en presentación de 31 de enero de 2012, ella si participa de la información que le entregan los distintos bancos e instituciones financieras, y la manipula, ya que como su misma página web lo anuncia, presta los siguientes servicios: En el apartado “*Nuestra Misión*” dice “ *Entregar servicios intensivos en información y tecnología para apoyar procesos decisionales y de negocios de nuestros clientes, agregándoles valor con nuestra calidad de servicios, seguridad y mejores precios, en un marco de confianza y proactividad, con un equipo humano competente y motivado.*”

Además, en cuanto a la descripción de su “Marco Legal” señala lo siguiente: Sinacofi es una sociedad cuyo objeto social contempla el desarrollo de actividades relacionadas con el procesamiento de datos mediante sistemas computacionales, sistemas automatizados de transferencia de información y la prestación de servicios de información a la industria bancaria y al mercado en general, bajo estándares de alta seguridad en su integridad, exactitud y disponibilidad.

En la prestación de servicios de información tanto a la industria bancaria como al mercado en general, Sinacofi efectúa un tratamiento de datos personales, lo cual se encuentra regulado por la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Tratamiento de datos personales, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de octubre de 1999.

Agrega que la ley 19.628 constituye el marco general y particular a partir del cual Sinacofi otorga sus servicios de información comercial. Señala que en este sentido, la actividad comercial de Sinacofi se desarrolla en estricto apego a la ley señalada, en especial, el pleno respeto de los derechos que la ley garantiza a todo titular de datos personales, el tratamiento y la comunicación de datos personales conforme a las facultades, restricciones y prohibiciones que la ley establece para todo operador de bases de datos. Asimismo, nuestros servicios de información se desarrollan respetando y cumpliendo las disposiciones de la ley de Protección al Consumidor en cuanto resulten aplicables.

Sinacofi dispone de facultades tanto legales como contractuales que le permiten administrar múltiples bases de datos públicos o privadas y, a partir de ellas, comunicar información comercial, bancaria, financiera, económica y de otra naturaleza, a objeto que el mercado en general disponga de una herramienta eficaz en la toma de decisiones y análisis de sus propios negocios.



Conforme a ello, asevera que, la demandada SINACOFI si entrega servicios de informe y si “manipula” información, por lo que le cabe responsabilidad en la situación descrita en autos.

Prosigue analizando lo que denomina “Fundamentos de la acción que interpone”, indicando que en primer lugar se referirán a la Ley 19.628 por tratarse de una ley especial que reguló la protección de información privada de las personas a cargo de base de datos para no provocar perjuicios en las personas cuyos datos forman parte de ellos ya sea económico, ya sea moral.

Transcribe los artículos 1, 2, 5 y 11 de la referida ley, en cuanto define los conceptos básicos de la ley, para luego señalar que en cuanto a los derechos de los “titulares de datos” son los siguientes:

- En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, inequívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen excepto si afecta la seguridad de la nación o el interés nacional (artículo 2 inciso 2°).;
- Esta modificación o cancelación debe ser informado por el responsable del banco de datos a todos aquellos que tengan acceso a dicho banco de datos (artículo 2 inciso 6°).;
- El titular de datos tiene derecho a requerir de cualquier institución que tenga acceso al banco de datos, información sobre sus datos (artículo 14).
- Además, establece un procedimiento judicial sumarísimo para pedir se modifiquen sus datos erróneos, cuando no reciba una respuesta oportuna por parte del responsable del banco de datos.

Luego en el Título III de la ley se refiere a la utilización de datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, por ser esta materia especialmente sensible, que afecta aspectos muy importantes de la vida de los titulares de datos, imponiendo obligaciones a los responsables de bancos de datos en cuanto a qué obligaciones pueden informar, cuándo deben eliminarlos, etc.

Agrega que en el Título siguiente se refiere al tratamiento de datos por organismos públicos, diciendo que ellos están autorizados a tener bancos de datos sólo respecto en las materias de su competencia, cuestión que operó en este caso ya que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras elabora el “Estado de Deudores” dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 14 de la Ley General de Bancos.

Luego expone que el artículo 23 es la norma que consagra la responsabilidad legal que les corresponde a quienes crean, manejan y



aprovechan bases de datos, en el sentido de estar obligados a indemnizar los perjuicios causados a personas por manejo equivocado o ilegal de la información, disposición que transcribe.

Afirma que existe responsabilidad legal de todos los demandados, por los siguientes motivos, en **primer lugar**, respecto a la **Superintendencia**, indica que la responsabilidad es más evidente ya que es ella la responsable de la base de datos que elabora mes a mes por mandato legal, llamada “Estado de Deudores”, y que a su vez refunde a todos los Bancos e Instituciones Financieras, quienes lo consultan y lo siguen, para su mejor funcionamiento. Añade que es la Superintendencia en el marco de sus funciones fiscalizadoras y controladoras de este tipo de organismos, la que debe elaborar y llevar este registro, absolutamente necesario para un sistema financiero sustentable, por lo que es responsable de su contenido, el que da a conocer a todo el sistema financiero a nivel nacional.

En cuanto al **Banco Santander** expone que, la responsabilidad de este fluye de los antecedentes del caso: según la información contenida en el Estado de Deudores conocido por su parte el 26 de marzo de 2009 y DICOM conocido con la misma fecha, la supuesta deuda de \$251.102.000 aparece informada en todas partes por el Banco Santander, con quien su parte sí tenía relaciones comerciales lo que explicaría la aceptación del error por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Reitera que el Banco Santander no ha sido capaz de probar fehacientemente que ella informó una deuda por sólo \$400.000 y no por \$251.102.000 o similar, ya que su defensa se ha basado en sus propios dichos, y certificados emanados de su misma parte, por lo que subsiste la duda en cuanto a su actuación.

Señala que no se debe olvidar lo informado por la SBIF en ordinario remitido a la Corte donde señala que lo informado por el Banco BCI en carta acompañada por su parte en el Recurso de Protección C-27-2009, es concordante con lo informado por el Banco Santander, quien informó de una deuda de su mandante, pero no señala a cuánto asciende la deuda, por lo que si sabía de la existencia de un error a esa fecha, no tuvo la prevención de aclarárselo a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en su informe.

Respecto a **SINACOFI** indica que la vinculación deriva del hecho de ser el vehículo de información entre los Bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, autorizados por reglamento expreso del señalado organismo público por lo que no puede dejar de considerarse un



actor importante en esta equivocación surgida en la elaboración y entrega del Estado de deudores por parte de la SBIF. Esto se acrecienta por el hecho de que SINACOFI ha tratado de exculparse de toda responsabilidad presentándose como el mero administrador de una plataforma electrónica en donde “pasa” información, afirmando no tener ni la más mínima injerencia en ella, siendo que en su propia página web dice expresamente que presta servicios de información, es decir, ella los crea y los entrega como servicio a todos sus clientes, por lo que sin duda tiene una participación en el orden de entrega de dicha información.

En subsidio, señala que basa su acción de indemnización de perjuicios en las normas comunes establecidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, como explican. Para ello transcribe la disposición.

Explica que raíz de estas normas sobre la responsabilidad extracontractual consagradas en el Código Civil y conforme la doctrina también, para la existencia de dicha responsabilidad deben existir 4 elementos copulativos para que nazca la obligación de indemnizar el daño causado: 1. Capacidad del autor del delito o cuasidelito; 2. Que el hecho provenga del dolo o culpa; 3. Que se cause un daño; y que, 4. Que entre el hecho u omisión dolosa o culpable y el daño exista una relación de causalidad.

En cuanto a la **capacidad** sostiene que conforme el 2319 del Código Civil, disposición que transcribe, son plenamente capaces todas las demandadas. En cuanto a su capacidad cuasidelictual, las personas jurídicas se encuentran obligadas a indemnizar los daños que por culpa u omisión, han ocasionado, las personas naturales que obren a su nombre o representación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 545 del Código Civil.

Respecto de los **daños**, indica que de acuerdo a la exposición del Profesor Alessandri pareo que exista responsabilidad extracontractual es de la esencia que se provoque daño, que define, para remitirse a los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil. Indica que en la especie, no cabe duda que hubo daño cierto en el actor tanto en el aspecto patrimonial como extrapatrimonial, ya que existió un rechazo expreso por parte de instituciones bancarias para operar, lo que los afectó profundamente en sus valores, ya que como empresa familiar con ascendencia india son bastantes rígidos en cuanto a la ética y lo que significa la fama y el honor.

De esta forma, señala, todos estos daños se calculan en una suma no inferior a los \$200.000.000 ya que realizan importaciones anuales por varios



millones de dólares y esta situación afectó su normal operación por lo menos dos meses.

Manifiesta que por tratarse de responsabilidad extracontractual, debe indemnizarse todo daño, incluyendo el daño moral que en este caso es el descredito público, ya que todos los bancos e instituciones financieras supieron de la supuesta “deuda” de Nandwani. Y tuvo que existir un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, para que se enmendara la información.

En cuanto a la **imputabilidad**, tercer elemento que la ley exige para que exista responsabilidad extracontractual es que haya por parte del autor del hecho, dolo o culpa en su actuar. Cita jurisprudencia, para luego señalar que es claro que los demandados tuvieron una conducta negligente o culpable por cuanto participaron de la recopilación, manipulación y posterior entrega de información relacionada con una supuesta deuda de su representada que nunca existió.

Finalmente, respecto de la **relación causal**, cuarto y último elemento exigido por la ley para que haya responsabilidad extracontractual es que entre el dolo o la culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de causalidad, es decir, que éste sea la consecuencia o efecto de este dolo o culpa. Afirma que sin lugar a dudas, entre la conducta negligente de los demandados de autos y los daños inferidos a su representada hubo una relación de causalidad.

SEGUNDO.- Que, en estos autos comparece don Sergio Rojas Abarzúa, abogado, en representación de la demandada **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras**, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

Expone que, ha sido demandada afirmándose que ese organismo incorporo indebidamente a la actora en el Estado de Deudores de enero del 2009 al figurar en la cartera vencida del Banco Santander por una deuda ascendente a la suma de \$251.102.000.-

Afirma que ese aserto básico y único que se ventila como fundamento de hecho de la acción deducida contra su parte, no es efectivo.

Agrega que los antecedentes que entrega la demandante para sostenerla son tres: **a)** Una comunicación telefónica recibida del banco Corpbanca el 26 de marzo del 2009 como señala en el párrafo 1 de su libelo, **b)** Información en igual sentido que recibió del banco BCI por carta del 2 de abril del 2009, según lo indica en un pasaje del párrafo 13, **y c)** La publicación



de esta deuda en el Boletín Comercial del 26 de marzo del 2009, como lo dice en el párrafo 7.

Añade que el resto del lato escrito estaría dedicado a describir los esfuerzos que hizo para individualizar al responsable puesto que ni el Banco Santander ni la Superintendencia reconocieron en las diversas gestiones realizadas, el primero haber enviado el reporte de la deuda a la segunda, para ser incluida en el Estado de Deudores, ni esta última el haberlo hecho si tal situación no le fue informada por el mencionado banco Santander.

Indica que posteriormente inició estos autos con su acción preparatoria que dirigió contra la Superintendencia, el Banco Santander y SINACOFI, pero no hizo lo más elemental que aconsejaban estas circunstancias: no emplazó a los bancos Corpbanca y BCI para que mostraran la publicación del Estado de Deudores a la cual se remitieron en la información dada a la actora, ni tampoco emplazó al responsable del Boletín Comercial para que exhibiera la fuente que le permitió incorporar la desdolorosa información en su revista, que es de pública circulación y que a la postre resulta ser el hecho más grave puesto que si los entes financieros le negaron el crédito a raíz de aparecer en el Listado de Deudores de la Superintendencia, lo que perjudicó su reputación comercial en el medio que ejercía sus actividades, causa del daño moral que demanda como lo admite la jurisprudencia, es esto último que no puede imputarse ni a los bancos ni a la Superintendencia porque la información sobre cualquier deudor en el Estado de Deudores que elabora su representada no puede ser divulgada, so riesgo de cometerse delito por quien lo haga.

Afirma que es indispensable para esta causa saber que el Estado de Deudores que edita la Superintendencia lo hace en cumplimiento del mandato que le entrega la parte final del inciso tercero del artículo 14 de la Ley General de Bancos y se confecciona con la información que remitan los propios bancos de acuerdo a las instrucciones contenidas en el “Manual de Sistemas de Información” y el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas, razón por la cual la única forma en que una deuda pueda aparecer en este Estado es por estar contenida esa información en el archivo que remite a la Superintendencia el banco respectivo, y que se hace llegar justamente con el objeto de incorporarla al referido Estado. La información así recibida se refunde mensualmente y se envía directamente a los bancos y cooperativas supervisadas.



Señala que en consecuencia la Superintendencia no interviene ni manipula en modo alguno los datos recibidos en algún procedimiento o modo que signifiquen alterar la individualización de los deudores y los montos de sus deudas.

Agrega que de lo cual se infiere que si el Banco Santander no reconoce haber enviado a la Superintendencia la información que la actora considera lesiva, simplemente la misma no pudo aparecer en el Estado elaborado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a menos naturalmente que en este excepcional caso alguien perteneciente a la Superintendencia hubiera alterado la información relativa a la actora luego de recibida, lo que tampoco aconteció ni pudo racionalmente suceder dado que los procedimientos informáticos de transferencia de los datos no lo hace posible.

Explica que la antedicha conclusión no se altera porque la actora haya recibido noticias en sentido diverso del Banco Corpbanca, como se expone en el párrafo 1 del libelo, o del Banco BCI como lo expresa en otros pasajes de su acción, mayormente que pudiendo haber sido posible, no se ha acompañado como elemento fundante ningún documento de dichos bancos que reproduzcan la información del Estado de Deudores del mes en que se habría producido la publicación lesiva. Añade que el único antecedente escrito que la actora manifestó haber presentado durante las gestiones judiciales que realizó, sería el emanado del Boletín de Informaciones Comerciales, sin percatarse que el contenido de las publicaciones del Boletín Comercial no pueden provenir del Estado de Deudores que elabora la Superintendencia, porque la norma legal contenida en el inciso tercero del artículo 14 de la Ley General de Bancos entrega a la Superintendencia la obligación de elaborarlo “para el uso de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización” y que tipifica como delito y castiga con una severa sanción a quien revele a terceros los datos registrados en ese Estado, y que también, demuestra no conocer la normativa emanada de la propia Superintendencia sobre la materia, contenida en el **Capítulo 20-6 de la Recopilación Actualizada de Normas** que regula la información que los bancos deben entregar obligatoria y voluntariamente al Boletín. Señala que **en síntesis**, la obligación estaría fijada en los números 1 y 2 y 2.2 del referido Capítulo y corresponde a las nóminas de cheques, letras y pagarés protestados por falta de pago por Notario u Oficial del Registro Civil, o por el propio banco, en su caso, y la información voluntaria es la contemplada en el punto 3 del citado Capítulo donde se faculta a estas entidades para



enviar el Boletín una nómina de deudores que hayan incurrido en mora en el servicio de sus préstamos o créditos a favor del mismo banco, exclusivas las deudas señaladas en los números precedentes, con la única limitación que los títulos en que conste la deuda sean ejecutivos. E incluir en tales nóminas a todos los deudores, sin discriminación.

Asevera que lo más destacable sería que la Superintendencia no interfiere en modo alguno en el envío que los bancos hacen de la información al Boletín, razón por la cual también es imposible que en el caso de la especie la misma se haya tomado del Estado de Deudores.

Continúa exponiendo que se rechaza también, en términos absolutos que tal incorrección haya sido cometida por alguno de los funcionarios de la Superintendencia, tanto por consideraciones éticas cuanto por la obvia que no debe pasar desapercibida, cual es que tan inserción no existió si el banco Santander sostiene no haber informado esa deuda a la Superintendencia. Por consiguiente, la publicación del Boletín Comercial que afectó a la demandante, no pudo tener su fuente en el Estado de Deudores de la Superintendencia, aparte de ser informado en ese Estado sólo y únicamente lo que le informa el banco Santander, a su contenido solamente han podido tener acceso las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia y el Boletín Comercial no pertenece a esta categoría de modo que la publicación que hizo en su revista emana de una fuente diversa del Estado de Deudores de la Superintendencia.

Concluye señalando que, si las informaciones recibidas por la actora de los banco Corpbanca y BCI no pasan de constituir testimonios o declaraciones informales carentes de todo valor procesal, la publicación del Boletín Comercial sí que la tiene pues se trata de un documento material hecho público y por tanto es el único antecedente escrito que le sirve a la actora para inculpar a su parte sin advertir que el mismo no tuvo ni pudo tener como fuente el Estado de Deudores elaborado por la Superintendencia de Bancos. Añade que perfectamente pudo emplazar al Boletín Comercial a entregar la fuente que utilizó y no lo hizo, por lo que deberá asumir la responsabilidad de pagar las costas que su parte incurrirá por una acción entablada con dicha falta de diligencia. Terminan sosteniendo enfáticamente que la información que afectó a la actora no emanó del Estado de Deudores que en su época elaboró su parte, lo que se constituirá en el principal para el rechazo de la demandada. En cuanto al derecho expone que, el Estado de Deudores es una base de datos de carácter reservado, elaborado por la Superintendencia única y exclusivamente para el conocimiento y uso de las instituciones financieras bajo



su fiscalización, de modo que mal podría darse por acreditado que la información que el Boletín Comercial hizo pública perjudicando a la demandante, por el solo hecho de publicarse, fue tomada de dicho Estado de Deudores. El Boletín Comercial no pudo, de no mediar el delito penal, tener acceso a conocerlo. Tampoco podrá dársele mérito a los bancos Corpbanca y BCI sin que éstos respalden lo que comunicaron a la actora en su época con la reproducción gráfica de la parte del Estado de Deudores donde aparezca debiendo el crédito inexistente.

Añade que, si el Estado de Deudores trascendió al público, particularmente al Boletín Comercial que lo usó como fuente para su publicación, tal situación habría sido el producto de un delito penal de manera que corresponderá a la actora establecer que su autoría fue de algún funcionario de la Superintendencia para hacerle a ésta y al autor material, responder de las indemnizaciones que demanda.

Anticipa que obviamente eso no ocurrirá, en el orden ideal en que se entrado a este análisis es preciso volver a encontrar la relación de causa a efecto que determine la obligación de indemnizar, cabe señalar que, de haberse incluido a la actora indebidamente en el Estado de Deudores, únicamente habría sido, o por la información errónea únicamente también habría sido de exclusivo conocimiento de las instituciones financieras receptoras del Estado de Deudores que, por expresa prohibición, no podían darla a conocer al público sino sólo usarla para calificar la capacidad crediticia de la demandante. Así, el mayor perjuicio que le habría sobrevenido habría sido la imposibilidad de obtener los créditos a la sazón ya solicitados.

Agrega que este sería pues el reducido espacio y entidad de los perjuicios porque es innegable que la señalada causa solamente pudo ser conocida por la banca más no debió serlo, dada la reserva de la información, por las relaciones comerciales de la actora y si eso finalmente sucedió fue porque se la incorporó a un medio de conocimiento público como es la revista del Boletín Comercial, como lo fue en este caso, pero la responsabilidad de esta publicación ya no sería posible atribuírsele a la Superintendencia sino a quienes le permitieron el acceso al Estado de Deudores al editor de esa revista o a este mismo por haber obtenido el material utilizado como producto de un delito. Los perjuicios materiales y morales derivados de la publicación, sería claro que no podría atribuirse a quien fue víctima de la sustracción de la información dado el hecho que la Superintendencia solamente entrega el Estado de Deudores a las instituciones que señala el artículo 14 de la Ley



General de Bancos entre las cuales no se cuenta la empresa que edita el Boletín Comercial.

Hace presente que sería lógico concluir, que esa información fue proporcionada al Boletín Comercial por alguien perfectamente identificable por sus editores y no por la Superintendencia. La actora pudo llegar fácilmente a averiguarlo y no lo hizo, prefiriendo entrar a una aventura judicial como ésta demandando a la Superintendencia por perjuicios que, de haber sido efectivamente derivados de la culposa elaboración del Estado de Deudores, solamente habrían sido limitados a la imposibilidad de obtener créditos bancarios, pero no más allá como serían los efectos nocivos en el orden patrimonial producidos por el daño moral infligido al experimentar la disminución de su imagen comercial entre el público en general.

Afirma que atendido que la indemnización del daño moral a las personas jurídicas es una creación jurisprudencial reciente hay que atenerse a los lineamientos que se han ido entregando en los fallos que han acogido esta postura y lo más avanzados en la materia concluyen que el quantum del daño moral indemnizable, aun cuando sea el arbitrio del juzgador el que lo determine, no puede ser superior a la cuantía o valor de los desmedros materiales que sufra la víctima en su patrimonio a consecuencia de dicho desprestigio.

Señala que de lo anterior la actora deberá acreditar ese monto, limitado al causado por la imposibilidad de disponer de los recursos crediticios que le habrían sido negados, pero en ningún caso podría reclamar de la Superintendencia los causados a consecuencia del conocimiento público de ese endeudamiento inexistente.

Concluye, como es el caso, que en parte alguna del libelo se exponen las bases para hacer estas estimaciones, lo cual impediría a la demandada hacerse cargo en su defensa de ese aspecto de la demanda y también impediría al tribunal fijar en la ideal sentencia que la acoja el monto de la indemnización.

TERCERO.- Que, comparece don Juan Pablo Prieto Saldivia, por la demanda **Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A. (SINACOFI)** solicitando que esta sea rechazada en todas sus partes, por carecer de todo fundamento de hecho y de derecho según pasa a exponer.

Inicia su defensa en el Capítulo I. **“LOS HECHOS”**, comenzando por el apartado **“I.I. Hechos señalados en la demanda”** señalando que, la sociedad **Empresas Nandwani Limitada** ha entablado demanda en juicio



ordinario en contra de las siguientes personas: a) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; b) SINACOFI; y c) Banco Santander- Chile quien pretende en su demanda una indemnización de perjuicios, fundada en el supuesto manejo erróneo de información financiera de la demandante, que le habría causado daños consistentes en verse estancadas operaciones de comercio internacional; daños consistentes en descrédito en la industria; y daños de carácter social; todo lo cual constituiría una infracción al artículo 23 de la Ley 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Agrega que en la exposición de los hechos que sostienen su demanda, la actora alega que entre marzo de 2009 y alguna fecha (que no especifica) anterior a agosto de ese mismo año se habría incluido en el informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras un dato referido a una deuda vencida a favor del Banco Santander-Chile, por más de 250 millones de pesos, que no habría existido.

En cuanto a su parte, la arrastra a esta demanda sin hacer ninguna imputación fáctica concreta, sino que se limita a demandarla por “la responsabilidad legal que les cabe en el manejo erróneo de información financiera”, razón por la cual persigue que sea condenada al pago de la millonaria indemnización que pretende. Señala además que se extiende esta acción, porque ni SINACOFI ni las otras dos demandadas habrían sido capaces de “presentar una defensa certera ni de explicar cuál fue el error en este caso”.

Añade que tal y como se habría señalado al plantear la excepción de ineptitud del libelo, el juicio de esta parte resulta completamente confusos e indeterminados los hechos que la contraria imputa a SINACOFI y a partir de los cuales pretende fundar la responsabilidad que persigue.

Agrega que para un adecuado entendimiento de la controversia en torno a la cual gira la Litis, reitera una somera explicación acerca del origen, naturaleza, tratamiento y regulación de la información que la contraria alega habría sido tratada de manera ilegal o indebida, causándole daño.

Luego, en el apartado “I.II. *Origen de la Información*”, señala que, la actividad de SINACOFI en cuanto al tratamiento de los datos que los Bancos envían a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para la conformación del archivo electrónico conocido con “Estado de Deudores” o “Deudores del Sistema Financiero” se limita a la de un mero facilitador de la plataforma tecnológica a través de la cual dichas entidades intercambian la información respectiva.



Expone que el artículo 12 de la Ley General de Bancos dispone que: *“Corresponderá al Superintendente de Bancos e Instituciones financieras velar que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras posiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus publicaciones y negocios.*

La facultad de fiscalizar comprende también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas.

Para los efectos indicados, podrá examinar sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de dichas instituciones y requerir de sus administradores y personal, todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información acerca de su situación, de sus recursos, de la forma en que se administran sus negocios, de la actuación de sus personeros, del grado de seguridad y prudencia con que se hayan invertido sus fondos y en general, de cualquier otro punto que convenga esclarecer.

Podrá, asimismo, impartirles instrucciones y adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias que observare y, en general, las que estime necesarias en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público.

Transcribe también el inciso tercero del **artículo 14 de Ley General de Bancos** *“Con el objeto exclusivo de permitir una evaluación habitual de las instrucciones financieras por firmas especializadas que demuestren un interés legítimo, la Superintendencia deberá darles a conocer la nómina de los deudores de los bancos, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido. Lo anterior sólo procederá cuando la Superintendencia haya aprobado su inscripción en un registro especial que abrirá para los efectos contemplados en este inciso y en el inciso segundo del artículo 154. La Superintendencia mantendrá también una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización. Las personas que obtengan esta información no podrán revelar su contenido a terceros y, si así lo hicieren, incurrirán en la pena de reclusión menos en su grado mínimo a medio”.*

Añade que atendido el tenor de la disposición transcrita, los Bancos e Instituciones Financieras sometidas a la fiscalización de la Superintendencia del ramo se encuentran legalmente obligados a enviar, en la forma y con la periodicidad que dicha entidad establezca la totalidad de la información que dicho ente fiscalizador les requiera, entre los cuales se



encuentra, por expresa exigencia del citado artículo 14 de la Ley General de Bancos, la nómina de los deudores de los bancos, los saldos de sus obligaciones y las garantías que hayan constituido .

Indica que a partir de lo prescrito por esta disposición legal, la Superintendencia del ramo exige a los bancos que le envíen periódicamente la información de que cada una de las instituciones fiscalizadas dispone en relación a los tres aspectos antes indicados.

Expone que una vez recibida la información, es la propia Superintendencia la entidad que, por su cuenta y en cumplimiento de mandato legal, efectúa el tratamiento de la información recibida y genera en el archivo denominado “**Consolidado de Deudores del Sistema Financiero**” que no es otra cosa sino la base de datos normalmente conocida como “Estado de Deudores”, “Deudores del Sistema Financiero” o “Deuda Súper” (en adelante también DSF).

Continúa aseverando que generado el señalado archivo, y siempre en cumplimiento de mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley General de Banco, la misma Superintendencia debe poner esta información a disposición de los mismos bancos, para su uso exclusivo.

Sostiene que de esa manera, queda en evidencia, primero, que la generación del DSF obedece al cumplimiento de un mandato legal por parte de la entidad fiscalizadora competente y segundo, que una vez generado dicho archivo (o base de datos) éste pasa a ser de propiedad y uso exclusivo de los bancos, quienes a su vez están también obligados a utilizarlo en el análisis de riesgo y gestión de crédito de sus clientes.

Luego, en el apartado “I.III. *Envío de la información que compone el DSF desde los Bancos a la Superintendencia y viceversa*” indicando que su representada es propietaria y administradora de un sistema automatizado para el tratamiento y procesamiento de información bajo especiales condiciones de seguridad y control.

Agrega que en tal calidad SINACOFI ha desarrollado y administra un sistema computacional de comunicaciones financieras, el cual permitiría el intercambio automatizado de mensajes entre los distintos usuarios de éste. En EL SISTEMA se distinguen:

- a) SUBSISTEMA CENTRAL: Instalado en las dependencias de SINACOFI, compuesto básicamente de: servidores, elementos de comunicación, software básico, software de aplicación, bases de datos y



procedimientos necesarios para su debido funcionamiento, de propiedad de SINACOFI.

- b) SUBSISTEMA LOCAL: Interfaz de usuario en las dependencias de los clientes, compuesto básicamente de software de aplicación y procedimientos de propiedad de SINACOFI. Procesadores locales, software básico y elementos de comunicaciones de propiedad el respectivo cliente.

Adiciona que este sistema automatizado tiene por objeto permitir la comunicación entre los distintos participantes del mismo a través del envío y recepción de mensajes electrónicos, esto es, un conjunto estructurado de datos que se transfieren desde o hacia el SUBSISTEMA LOCAL, en formatos estándares, cumpliendo con condiciones de seguridad, requisitos y formalidades previamente determinadas por el diseño de EL SISTEMA y por procedimientos de orden administrativo y operativo.

Indica que atendido su origen SINACOFI satisface diversos requerimientos de la industria bancaria. Así, ha creado, mantenido y desarrollado diversos sistemas de mensajería electrónica que permite el intercambio de distintas informaciones entre los mismos bancos, ha desarrollado y opera la Cámara de Compensación de cheques y otros documentos, y ha dispuesto los medios tecnológicos necesarios para que los bancos cumplan con la obligación legal de enviar determinada información al Boletín de Informaciones Comerciales, se encuentra actualmente desarrollando el sistema de canje electrónico de cheques, etc.

Agrega que desde hace largos años SINACOFI habría puesto a disposición de la industria bancaria y de la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, su plataforma tecnológica y sistema de mensajería electrónica a fin de facilitar el envío de la información desde los bancos a la Superintendencia y desde ésta hacia aquellos. Asevera que la única intervención de SINACOFI en esta materia, es la de facilitador de los sistemas de comunicación que permiten el traslado en forma segura, rápida y eficiente de la información entre las partes involucradas en el proceso de generación de la base de datos a que alude el demandante. Reitera que sin embargo, Sinacofi no altera ni interviene ni manipula como lo ha señalado el demandante en su libelo, de manera alguna dicha información, toda vez que esta es confidencial y de uso exclusivo de los Bancos, sus legítimos propietarios.

Reitera que la actuación de SINACOFI se limita a poner a disposición de la industria bancaria, y de la autoridad administrativa, la



“carretera” por donde circula la información que los intervinientes se encuentran obligados a intercambiar en cumplimiento del mandato legal antes indicado.

Hace presente que en ejercicio de la potestad normativa que el antes citado **artículo 13 de la Ley General de Bancos** ha conferido a la Superintendencia respectiva, ésta ha impartido instrucciones generales de carácter obligatorio para los Bancos, las cuales se encuentran sistematizadas a través, entre otros, de la “Recopilación Actualizada de Normas” y el “Manual del Sistema de Información”.

Añade que en cuanto a la forma, contenido y oportunidad de entrega de la información que los bancos deben enviarle, la señalada Superintendencia ha dispuesto lo siguiente y transcribe:

“Para la preparación y entrega de información periódica a esta Superintendencia a través de archivos o mediante formularios, los bancos deberán atenerse a las instrucciones contenidas en el “Manual del Sistema de Información”. Las modificaciones a sus instrucciones serán comunicadas mediante una “Carta Circular-Manual Sistema Información”, adjuntando las respectivas hojas que contienen las modificaciones”.

Por su parte, el referido Manual del Sistema de Información señala y transcribe:

“Los bancos podrán transmitir a esta Superintendencia los archivos de que se trata utilizando el Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras (SINACOFI), con excepción de aquellos que expresamente haya señalado la Dirección de Operaciones y Tecnología de esta Superintendencia. Para la transmisión deberá utilizarse el procedimiento establecido por SINACOFI para este efecto”.

Luego asevera nuevamente que, conforme a lo expuesto, SINACOFI no interviene ni participa de manera alguna en la generación ni en el tratamiento de la información que integra el archivo denominado Consolidado de Deudores del Sistema Financiero, el cual, es generado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con información aportada por sus propios fiscalizados en cumplimiento del mandato legal que impone el artículo 14 de la Ley General de Bancos.

Reitera que INACOFI no participa en la generación ni en la administración del archivo denominado Consolidado de Deudores del Sistema Financiero solo se limita a poner a disposición de los intervinientes en ese proceso las



herramientas necesarias para el fluido tránsito de la información de una parte a otra.

Tampoco SINACOFI tiene injerencia en las decisiones que, una vez recibido el archivo de parte de la Superintendencia, cada uno de los Bancos pueda adoptar con respecto al uso que hará de esta información.

Añade que de esta forma, y atendido que el archivo es generado por la Superintendencia, que sus propietarios son los propios Bancos a los cuales el ente fiscalizador se los entrega, y que Sinacofi simplemente lo almacena y distribuiría, sin que le quepa intervención alguna, ni siquiera en la definición del formato de entrega (que también habría sido definido por la Superintendencia) haría concluir que no se puede imputar responsabilidad alguna por la generación, tratamiento o comunicación de los datos referidos.

Explica que dada la especial naturaleza de la base de datos en cuestión (el archivo denominado DSF) SINACOFI se encuentra impedido de realizar ninguna acción que implique o pueda implicar una alteración, modificación, adicción o eliminación, cualquiera que ella sea, al contenido de la información, independiente de la entidad o cuantía de la misma pues dichas decisiones competen, única y exclusivamente, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y/o a los propietarios del archivo respectivo (cada uno de los bancos receptores de la información).

Afirma que de esa forma, en los hechos que la contraria sitúa como límite de la discusión y fuente de la obligación indemnizatoria que pretende se declare a su favor, a SINACOFI, no le cabría participación alguna de manera que no pueda ser responsable de la publicación de una deuda que no existía o que tenía una naturaleza diversa de la señalada.

Continúa en el Capítulo II. “**EL DERECHO**”, exponiendo que, los hechos descritos por el demandante y que sirven de base a su pretensión de una indemnización de perjuicios, constituirían una infracción al artículo 23 de la Ley 19.628, y lo que el mismo demandante persigue es la indemnización de perjuicios por la responsabilidad legal que les cabría a los demandados en el manejo erróneo de información financiera, acción que funda principal y directamente en las disposiciones legales contenidas en el Ley 19.628.

Asevera que la ley invocada por el actor sería total y absolutamente inaplicable al caso de autos de manera que la acción deducida sería completamente improcedente en la forma en que ha sido planteada, ya que, el artículo primero y segundo de la Ley 19.628 así lo disponen, disposiciones que transcribe.



Añade que, como norma general de interpretación aplicable en la especie, el artículo 20 de Código Civil establece que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Así, bastaría interpretar la ley para llegar inevitablemente a la conclusión que las personas jurídicas no quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.628. Que, los datos de carácter personal, que son aquellos cuyo tratamiento debe sujetarse al marco regulatorio de la Ley N° 19.628, sólo pueden referirse a personas naturales y consecuencia de ello es que sólo las personas naturaleza pueden ser calificadas como titulares de datos de carácter personal.

Adiciona que, en estas condiciones, si la información referida a las personas jurídicas no puede ser calificada como dato de carácter personal, y las personas jurídicas no son ni pueden ser titulares de datos de carácter personal, el tratamiento de información, cualquiera que sea, referida a las personas jurídicas de ninguna especie, no se encuentra regulado por las disposiciones de la Ley N° 19.628.

Por ello, la demanda fundada en la infracción de estas normas especiales, no debiesen ser acogidas.

En relación a la petición **subsidiaria** de la demandante expone que, esta debe ser igualmente rechazada ya que no existe acto ilícito alguno que pueda servir de fundamento a la pretensión indemnizatoria alegada por la contraria. Asevera que no se cumplen con ninguno de los requisitos copulativos para que proceda una acción de indemnización de perjuicio por responsabilidad extracontractual, los cuales explica.

CUARO.- Que, asimismo en estos autos comparece doña Senda Villalobos Indo, abogada, en representación del demandado **Banco Santander Chile**, contestando la demanda, solicitando desde ya su rechazo, con expresa condena en costas, por lo siguientes motivos: **(a)** BANCO SANTANDER nunca informó una deuda por cartera vencida equivalentes a \$251.102.000; **(b)** La única deuda que habría sido informada a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fue por un monto aproximado de \$400.000, sumas provenientes de créditos relativos a operaciones de comercio exterior. Destacan que los montos informados -\$416.825 en diciembre de 2008; \$400.900 en enero de 2009 y \$387.899 en febrero de 2009- variaban mes a mes por tratarse de una operación cursada en moneda extranjera; **(c)** En el



Recurso de Protección Rol N° 27-2009 tramitado ante la Iltrma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se entregaron todos los antecedentes que disponía el banco en relación con este caso, entre los cuales se destaca el formulario de envío de información al sistema financiero donde sólo se informa como deuda directa vencida las sumas especificadas en la letra anterior; **(d)** En razón de lo anterior, no habiendo sido el bnco quien habría emitido la información que según la demandante habría sido erróneamente publicada, no podría prosperar la demanda respecto del Banco Santander Chile. **(e)** En este caso no concurren los supuestos de hecho establecidos en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada para hacer procedente la indemnización establecida en su artículo 23; **(f)** A mayor abundamiento, la morosidad de una empresa no constituye el objeto de protección de la Ley N° 19.628, por lo que la normativa invocada no resulta aplicable a este caso. **(g)** Por último, de igual manera tampoco concurren los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual, por lo que la demanda debe ser rechazada en su integridad.

Inicia el desarrollo de su defensa en el Capítulo I “**ANTECEDENTES**” realizando un breve análisis de la demanda de autos, del recurso de protección ya referido y de los antecedentes con que se cuenta hasta el momento.

Expone que la demanda carece de todo sustento tanto fáctico, como jurídico, ya que no existen antecedentes que permitan acreditar que el Banco informó la millonaria deuda y por otro, desde un punto de vista jurídico procesal, al no concurrir los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual en relación con el banco se genera la imposibilidad de que la demanda se acogida a su respecto.

Por último, hacen presente las siguientes circunstancias para ser tener como de suma relevancia a la hora de analizar su defensa: -Es del todo imposible que se les exija probar un hecho negativo, cuál es demostrar que jamás se envió la información que la demandante afirma fue erróneamente publicada; -Que un tercero, que no es parte del juicio- el Banco BCI- quien le habría señalado a la demandante que: “ en reporte de Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras de enero 2009, Banco Santander informa cartera vencida por M\$251.102 (doscientos cincuenta y un millones cientos dos mil pesos)”, como razón para negarle un crédito solicitado por la misma. Por su parte, fuera el Banco Corpbanca quien le habría comunicado que: “en los informes que evacua la SBIF la empresa que representa el demandante, figura con cartera vencida”, también como motivo para reevaluar la solicitud de



crédito; -En consecuencia, es imposible que esta parte pueda explicar y/o justificar las acciones del Banco BCI; del Banco Corpbanca; de la SBIF o de SINACOFI, y menos aún, que responda por las mismas, para lo cual será necesario que se acredite fehacientemente –más allá de los meros dichos de otra institución bancaria- que la información que erróneamente se publicó en el sistema financiero (y que consta a fojas 1 del cuaderno de medida Prejudicial) emanó efectivamente desde su parte, cuestión que no será posible dado que jamás informaron una duda que en todo momento han señalado es inexistente; -Que la información que la demandante alega fue enmendada en sus registros antes de que se resolviera el recurso de protección deducido por la demandante.

Luego en el Capítulo II que denomina “**BANCO SANTANDER NO HA INFRINGIDO LA LEY N° 19.628 SOBRE PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA**” expone que, jamás envió la información que según la demandante se habría publicado erróneamente, sin tener por lo demás injerencia alguna en la plataforma tecnológica donde se efectúa este tipo de publicaciones. Indica que esto por si sólo debiese bastar para desechar la acción de autos, sin perjuicio de lo cual creen advertir que existe un marco normativo que regula el envío de la información bancaria que debe ser pública, así como la forma material de su emisión, además que no sería plausible que por el hecho que el Banco haya dado cumplimiento con aquello, para la deuda vencida de \$400.000 aprox. correspondiente a una operación de comercio exterior, se le tuviera por infractor de otra normativa.

Añade que, en relación con la regulación de estas materias, existen dos vías por las que se proveen de información al sistema financiero, estas son: i) Los datos que por obligación legal se deben entregar a la SBIF; y, **(ii)** Los datos que los bancos publican en el Boletín de Informes Comerciales de la Cámara de Comercio (BIC).

Comenta que este último –por ser el pertinente al caso- es regulado por el **artículo 14 de la Ley General de Bancos 4 y por el Capítulo 18-5 de la Recopilación de Normas de la SBIF** relativa a la “Información Sobre Deudores de las Instituciones Financieras”, la cual dispone que las instituciones bancarias deben indicar las deudas que presenten una morosidad igual o superior a 90 días. Y esto fue lo que precisamente se informó por el BANCO, respecto de la deuda por \$400.000.- aprox. referida a las cuotas de una operación de comercio exterior suscrita por la demandante el 19 de octubre del año 2007.



Agrega que su representada también estuvo a lo señalado en el “Manual Sistema de Información Bancos y Financiera”, en particular a la Sección de Sistema de Deudores que contiene las instrucciones para el envío de los archivos del sistema de deudores a la SBIF.

Destacan en lo relativo al TIPO DE DEUDAS a informar, que: “En algunos archivos se pide información sobre deudas indirectas, como asimismo deudas correspondientes a créditos contingentes.

Tanto para las definiciones de deudas en general, como para establecer la calidad de deudores directos o indirectos, los bancos deben remitirse al Capítulo 12-3 de la Recopilación Actualizada de Normas”

Señala que el hecho que el banco teniendo en vista lo señalado precedentemente, informo la deuda de \$251.000.000 como crédito contingente, de lo cual no sería posible desprender alguna infracción a la Ley en comento.

En suma, no existió en el envío de información por parte del BANCO ni transgresión a la Ley, toda vez que en dicho proceso hubo un estricto apego a las normativas señaladas supra. Afirmar lo contrario requerirá que la demandante acredite con antecedentes concretos que fue el BANCO SANTANDER CHILE quién les informó la morosidad que es materia de este procedimiento.

Al existir obligación legal de informar no es posible estimar que dichos datos (deuda vencida y deuda contingente) tengan el carácter de dato personal íntimo o sensible, que es aquel para cuya protección se dictó la Ley.

Señala que el fundamento del por qué el dato sobre la morosidad de una empresa no se encuentra protegido por la Ley N° 19.628, se explicita en el voto en contra de los Ministros Sr. Pierry y Sra. Araneda en la causa Rol N°4832-2010, conocida por la Excm. Corte Suprema el 24 de Septiembre del año 2010, el que comenta.

Asevera que la normativa invocada por el demandante tampoco resulta idónea a los efectos de obtener la indemnización alegada, por cuanto la información que alega erróneamente difundida no puede ser identificada con el bien jurídico que resguarda dicha Ley.

Por todo lo anterior, al no haberse cometido por su parte una acción en contravención a la Ley y al no consistir el hecho controvertido en el supuesto regulado por la Ley invocada, no se le podrá imputar al Banco la responsabilidad consagrada en su artículo 23 y tampoco se le podría exigir que proceda a *“eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo con lo requerido*



por el titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal”, ya que ellos no fueron quien la difundió ni la originó.

Continúa en el Capítulo III bajo el título “**No concurren los supuestos normativos que configuran la responsabilidad civil extracontractual demandada**”, comenzando en el apartado “*Error en el estatuto de responsabilidad alegado. La demandante aún es cliente del Banco, por lo que su relación con dicha entidad es de carácter contractual*” indicando que la demandante mantiene con el Banco dos cuentas corrientes vigentes en moneda nacional y una en moneda extranjera – N°337490 y N° 7400054449; y N° 5100011559, respectivamente- por lo cual, el hipotético evento que el Banco hubiese entregado una información errónea a la SBIF –cuestión que no es efectiva, ello constituiría un incumplimiento al contrato de cuenta corriente bancaria, por lo que el estatuto jurídico a invocar debería ser el de responsabilidad civil contractual y no el extracontractual como en efecto se hizo.

Indica que, la demandante no sería clara en señalar cuál sería la obligación que el banco supuestamente habría incumplido, lo que hace presumir que invoca el estatuto de la responsabilidad civil extracontractual precisamente para evadir la singularización de una actuación precisa, ante la clara imposibilidad de identificarla, ya que la misma simplemente no ha existido.

Explica que, sin perjuicio de lo anterior, y como consecuencia del mismo error enunciado, resulta que la demandante no podrá beneficiarse de la presunción de culpa establecida en el artículo 1547 del Código de Civil, debiendo – en su defecto- asumir la carga de probar la pretendida falta de cumplimiento al deber general de conducta supuestamente cometido por el Banco de conformidad con el estatuto de la responsabilidad extracontractual alegado.

De este modo, y al no existir un incumplimiento por parte del banco, sea contractual o extracontractual- no será posible que se configuren los supuestos normativos para que se declare su responsabilidad y, en consecuencia, deba indemnizar de los presuntos perjuicios alegados por la demandante en autos.

Añade que el petitorio de la demanda de autos es del todo improcedente, por cuanto no señala cuál sería el monto solicitado a indemnizar, faltando una petición concreta al respecto, entendiéndose que la indemnización de perjuicio busca obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia, es decir, aquél dinero que represente lo que el acreedor habría



obtenido si la obligación se hubiese cumplido efectiva, oportuna e íntegramente, por lo que imposibilita que se pueda acoger la demanda sin incurrir en el vicio de *ultra petita*.

Luego, en el apartado “*Inexistencia de un hecho ilícito por parte del Banco Santander*” expone el hecho que la existencia de un acto u omisión voluntario es el primer requisito establecido en el artículo 2314 del Código Civil para establecer la responsabilidad civil. Hace presente que en su demanda el actor señala que no tiene conocimiento de cuál de los demandados cometió el error de información ya que no habrían presentado una defensa certera de cuál fue el error. Sostiene que el banco sí ha presentado su defensa de manera íntegra y clara.

Reitera que lo informado por el Banco a la Illma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas a propósito del recurso de protección N°27-2009, del cual transcribe y destaca ciertos pasajes, los cuales dan cuenta que efectivamente su parte desplegó su defensa ante dicha magistratura.

Indica que, según lo expuesto y habiendo informado a cabalidad y responsablemente a la Illma. Corte a su parte no le cabe más que reiterar lo señalada, así como las pruebas acompañadas en dicha oportunidad, lo cual en su conjunto explica y acredita qué fue lo informado por el Banco, sin que a su respecto se le pueda exigir probar un hecho negativo que no informó una cartera vencida por \$251.000.0000 aprox. para resolver que su parte no cometió un hecho ilícito.

Continúa expresando en el apartado “*Improcedencia de los perjuicios alegados*” que en relación a la indemnización solicitada por la demandante, su monto no fue determinado en el petitorio de la demanda de acuerdo con lo señalado en el artículo 254 N°5 del CPC, ni tampoco se hizo uso de la reserva establecida en el artículo 173 del mismo Código, por lo que presenta insalvables equívocos sobre los cuales es necesario detenerse.

Explica que en primer término, al no haberse clasificado la naturaleza del daño alegado sólo para los efectos de poder desarrollar su defensa ante lo inepto del libelo y estando a los dichos de la misma demanda, su parte entiende que la actora pretende una indemnización por un supuesto Daño Moral. Al efecto transcribe párrafos de la demanda.

Sostiene que de lo anterior, es posible concluir a lo menos 3 circunstancias: 1. Que la demandante pretende hacer valer el supuesto sufrimiento de personas naturales-los miembros de la empresa familiar- que no tienen la calidad de demandantes en esta causa; 2. Que la demandante sólo



ha fundamentado un pretendido daño moral, por lo que no es posible controvertir otra clase de daño, dado que no ha sido explicitado, fundamentado, ni alegado; y, 3. Que la información que ha sido supuestamente difundida de forma errónea fue enmendada en sus registros con antelación a que se fallará el recurso de protección deducido por la demandante.

Expone que, bajo el supuesto indicado, hace presente que no hay que olvidar que, no obstante ser procedente la indemnización de daño extrapatrimoniales a personas jurídicas, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que está indemnización es plausible sólo en ciertos casos.

Para ello se remite a la doctrina del profesor Enrique Barros y transcribe pasajes de sus textos en la materia, así también jurisprudencia en el mismo sentido.

Agrega que conjuntamente con todo lo anteriormente señala, se tendrá que considerar que no toda perturbación es susceptible de ser indemnizada, toda vez que, está deberá referirse a la lesión de un interés jurídicamente tutelado y en segundo lugar, el daño pretendido deberá poder ser atribuido directamente a la actuación de quien sea responsabilizado en definitiva, requisito que desde ya informaron no concurren en el caso respecto de su parte.

Además, solicitando tener presente que en el moderno derecho de daños la naturaleza de éste ha superado completamente la noción irrestricta del daño moral como *pretium doloris*, estableciendo importantes limitaciones a la reparación del mismo, más aún cuando se trata de personas jurídicas.

Indica que vale la pena subrayar que de llegar a ser efectivo que la demandante sufrió los perjuicios alegados, ello habría sido una consecuencia directa de la negativa de un tercero (otra institución bancaria) que le expresó al momento de solicitar un crédito, negativa que, se justificaría en una información que jamás emanó desde el Banco Santander. Luego, el pretendido perjuicio ciertamente no podrá ser atribuido a su parte, por no ser el resultado de su actuar.

Por último, el daño moral deberá ser acreditado en el juicio de tal manera que exista certeza de la procedencia de la responsabilidad civil alegada, como lo señala la jurisprudencia que comenta.

Comenta de la sentencia recién citada que no sólo se concluye que el daño moral debe acreditar fehacientemente por los medios de prueba legales, sino que también, incluso cuando se trata de caos que podrían considerar



evidentes- como lo es la lesión o muerte de un hijo- la parte demandante deberá probar de manera precisa el daño moral demandado.

Respecto de la evaluación de los perjuicios morales el juez debe determinar la indemnización forme los antecedentes acompañados por partes para establecer la cuantía de los perjuicios el juez debe atenerse a la prueba que se haya allegado al proceso en forma legal.

Indica que en síntesis para que el daño moral pueda ser indemnización es necesario que éste sea válida y debidamente acreditado en el proceso por medio de las pruebas legales, circunstancia que no se da en el caso dado que el demandando no lo expuso.

Por ello, a la hora de analizar la pretensión indemnizatoria, se deberá ponderar si la misma se acreditó suficientemente en juicio, pues de lo contrario su mera concesión atentará contra el debido proceso, toda vez que en el ordenamiento existen presunciones de culpabilidad, pero no presunciones de daño, por lo que éste siempre debe ser probado por quien lo alega.

Finalmente, en el apartado *“Falta de relación causal entre los supuestos incumplimientos y los perjuicios alegados por la demandante”* expone que a modo de corolario y atendiendo el carácter subsidiario del presente capítulo hacen presente que el verdadero y único hecho que ha dado inicio al curso causal que concluyó en los sucesos que dan origen a estos autos, se encuentra en la respuesta entregada por Banco BCI y el Banco Corpbanca a la actora y la negativa de éstas instituciones bancarias a la solicitud de un crédito requerido. En este contexto, el Banco Santander no puede ser tenido como partícipe de dicha decisión ni puede responder de lo sostenido por dichas instituciones bancarias, toda vez que la actuación de las mismas no se encuentra bajo su esfera de acción.

En conclusión, señala, al no existir incumplimiento de obligación legal ni contractual alguna pudiese haber generado los perjuicios que se alegan y siendo imaginario la contravención a la Ley N°19.628 resulta evidente la inexistencia de un nexo causal capaz de vincular ambos institutos, no configurándose responsabilidad civil alguna que dé lugar a una indemnización de perjuicios.

QUINTO.- Que, el demandante evacuó el trámite de **Réplica** a las contestaciones efectuadas por los demandados, reiterando todos y cada uno de los argumentos expuestos en su libelo, recalcando sólo los aspectos



que se señalan en relación a la contestación de demanda interpuesta por cada uno de los demandados:

I.- En cuanto a la contestación de demanda de la **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)**, expone que ésta en ningún momento niega tajantemente que la información errada denunciada por su parte, esto es, el anuncio de una cartera vencida de más de \$251.000.000 haya sido incluida por ellos en el “Estado de Deudores” que por la ley, están obligados a confeccionar, siendo que para ellos seria de fácil comprobación, al contar con la información que, precisamente, ellos elaboran, por lo que estarían en posición de aportar al Tribunal los antecedentes que comprueben la inocencia que alegan en este caso, esto es, el Estado de Deudores de los meses de Diciembre 2008, Enero 2009 y Febrero del 2009, dando cuenta que no existen los hechos alegados por su parte.

Agrega que, contrariamente a eso, la SBIF lo que hace es incurrir en una serie de suposiciones, como si fuera un tercero completamente ajeno al conflicto, diciendo que “no es posible” que dicha información haya formado parte del Estado de Deudores que ella elabora y que, de haber sido así, existirían responsabilidades penales que se deben perseguir, lo cual deja entrever que la SBIF si conoce de la falta denunciada por esta parte, y que lo que le parece extraño o “incorrecto” no es la falta en sí, sino que ello haya llegado a conocimiento de la demandante.

Transcribe parcialmente la contestación para indicar que su parte señala en el libelo, como un antecedente más, que la deuda inexistente de más de \$251.000.000 apareció en el Boletín Comercial, pero la razón de la demanda en lo que dice relación con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es, precisamente, el que esa deuda haya aparecido en el “Estado de Deudores” que ella elabora, y que fue el medio de información aparecido en el “Estado de Deudores” que ella elabora, y que fue el medio de información consultado tanto por BCI como por CorpBanca, y la razón por la cual rechazaron gestionar créditos a favor del actor.

Añade que el querer simplificar las cosas y desviar el centro de discusión como lo hace la SBIF en su contestación de demanda, sería indicador de que no tiene una explicación satisfactoria del error cometido, y que se trata de escudar en que la demandante, solo se habría dañado con la información contenida en el Boletín Comercial, lo que claramente no sería así, según fuese explicado en la demanda.



Hace presente que en la medida prejudicial probatoria con la cual se inició este juicio, se acompañó informe que contiene los antecedentes comerciales y financieros de la compañía demandante “Empresa Nandwani Ltda” emitido el 26 de marzo del 2009 por SINACOFI donde aparece que su representado tiene una cartera vencida por más de \$251.000.000; que es un elemento en el cual se apoya su demanda.

Destaca que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras lo que hace es tratar de desacreditar de antemano la prueba que se podría presentar en este proceso. Puede suponer que, atendido el error ocasionado, y su posterior enmendadura, la SBIF está confiada en que esta prueba no saldrá a la luz, ya que hoy, esta información ya fue borrada del sistema.

Indica que repite su análisis la SBIF en el sentido de no señalar que ocurrió realmente, ni menos ofrecer pruebas para acreditarlo, ya que señala que, en caso de haberse incluido al actor en el Estado de Deudores, únicamente se habría debido a la información errada remitida por el Banco Santander, o por error propio al elaborar tal instrumento por parte de la superintendencia, y que en caso de haber ocurrido esto último, esta información errónea había sido de exclusivo conocimiento de las instituciones financieras receptoras del Estado de Deudores que por expresa prohibición no pueden darla a conocer al público, sino solo usarla para calificar la capacidad crediticia de su potencial cliente. Lo que es por cierto esa información no se le entregó “al público” en general, sino que fue utilizada por el Banco BCI y por CorpBanca para rechazar solicitudes de crédito solicitadas por la demandante.

Finaliza aseverando que la contestación de la demanda es ambigua, trata de enredar y cambiar los argumentos esgrimidos por su parte en su libelo y finalmente no da ninguna explicación que se pueda calificar como una defensa real y seria en en caso sublite.

II.- En cuanto a la contestación de demanda de **SINACOFI** indica que, ésta se excepciona diciendo que no tiene ninguna responsabilidad en el manejo de información entre Bancos y la SBIF, llegando a calificarse como una “Carretera” por donde pasa la información, sin que ellos tengan el más mínimo nivel de manipulación en ella.

Agrega que lo anterior no corresponde a la publicidad que hacen en su propia página web, donde señalan como “historia”, donde reconocería realizar servicios de administración, operación y desarrollo.



Es más, cuenta con una empresa independiente, dedicada ofrecer servicios especializados en análisis de riesgos y créditos. Es decir, hay manipulación de información, y en ello siempre existe el riesgo de fallar. Lo cual queda más claro aún si se revisa lo que SINACOFI señala como su “misión” en la misma página web.

III.- En cuanto a la contestación de demanda de **Banco Santander Chile**, se expone que se remite a lo ya expuesto en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en Recurso de protección tramitado a propósito del mismo tema, rol 27-2009, donde señala que ella no informo la deuda de \$251.000.000 que luego aparece en el Estado de Deudores ya referido.

Añade que no deja de llamar la atención que, en este caso, igual que en el informe evacuado a propósito del ya referido recurso de protección, el Banco Santander excepcionó diciendo: *“No ha sido el Banco Santander Chile, la entidad que ha informado como morosa la deuda que es materia de autos. De acuerdo a la revisión de nuestros sistemas, esta información no fue emanada del Banco”*.

Expone que de todo lo señalada y lo no señalado también, que los demandados saben perfectamente qué ocurrió, quién cometió el error, y lo que están haciendo es cubrirse la espalda de uno al otro, sin tener una defensa clara cada uno, ya que ello implicaría responsabilizar a uno solo del hecho denunciado.

Comenta que en cuanto a que la Ley 19.628 no se aplicaría a personas jurídicas, el Banco Santander pretende sustentar este argumento con el voto disidente dictado por los ministros Pierry y Araneda en causa rol 4832-2010. Pero que, sin embargo, omite decir que, dado que se trata de votos disidentes, la mayoría de la sala de dicha oportunidad opinó lo contrario y que fue de confirmar el fallo dictado en dicha instancia por la Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 725-2010 que acoge un recurso de protección interpuesto por una sociedad contra Dicom Equifax por haber publicado una deuda que no era tal, reconociendo así la legitimidad de las personas jurídicas con respecto al correcto manera de la información que esa más valiosa para ellas, y que es la información comercial, ya que es la que les permite funcionar y competir en el mercado.

Respecto del supuesto error en el estatuto de responsabilidad aplicado expone que el Banco Santander señala que su parte debería invocar el estatuto de responsabilidad contractual ya que tienen un contrato de cuenta corriente, sin embargo, el hecho que su parte denuncia dañoso no tiene nada



que ver con las obligaciones derivadas del contrato de cuenta corriente suscrito con el Banco, por lo que en este caso cabe demandar la responsabilidad legal o en subsidio, la extracontractual del Banco transgresor.

En cuanto al tipo de daño demandado y su procedencia comenta que en el libelo presentado se trató específicamente en su apartado 19 de “los daños” señalando que el actuar negligente de los demandados había producido un daño tanto patrimonial como extrapatrimonial a la actora porque está situación de aparente “insolvencia” los había afectado con su capacidad de crédito de distintos bancos, por lo menos por el periodo de dos meses, crédito que necesitan para funcionar, por lo que se trata de lucro cesante: negocios que se dejaron de realizar producto de la negativa de la banca a emitir los documentos crediticios que la actora necesitaba. Agregan que hubo daño moral ya que se provocó un descrédito público en su parte ya que funcionan en una ciudad relativamente pequeña, en la que todos los bancos supieron de esta situación y hubo que interponer un recurso de protección ante la Corte, y esperar varios meses, antes de que este error pudiese ser aclarado. Finaliza exponiendo que, indudablemente el daño moral en este caso si es indemnizable, ya que se refiere al prestigio comercial, no al “dolor o sufrimiento”, prestigio que toda empresa procura crear y luego mantener en el tiempo, ya que al fin de cuentas constituye uno de sus mayores activos.

SEXTO.- Que, la demandada **Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A.**, evacuó el trámite de **Dúplica** en los siguientes términos aseverando que el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, sin alterar las que sean objeto principal del pleito.

Pero indica que no obstante lo anterior, la actora al evacuar el trámite de réplica no ha ampliado, adicionado ni modificado de manera alguna la acción entablada, limitándose a comentar los argumentos y excepciones alegadas por su parte y el resto de los demandados.

Agrega que en lo que se refiere a su parte, la actora se ha satisfecho en alegar que los expuesto por ellos en la contestación “no corresponde a la publicidad que hacen en su propia página web (como si este fuera un juicio por publicidad engañosa, que no lo es) para a continuación, transcribir algunos textos obtenido (según ellos, pues tampoco les consta que sea cierto) de dicha página web.



Señala que no habiendo efectuado la contraria ninguna ampliación, adición ni modificación respecto de sus acciones, nada más tendrían que decir respecto de lo señalado por ella.

Continúa señalando que **en cuanto a las excepciones, alegaciones y/o defensas planteadas por su parte en la contestación** se permiten decir lo siguiente:

Respecto de aplicación de la Ley 19.628 hace presente que ha alegado que la acción es inviable por cuanto el fundamento de derecho que se pretende sostener es erróneo, ya que la acción se sustenta en las disposiciones de la comentada ley, el cual resulta inaplicable por cuanto su campo de aplicación se restringe, exclusivamente a las personas naturales en cuanto titulares de derecho personales.

Asevera que las personas jurídicas no son titulares de datos para los efectos de la Ley 19.628, de manera que a su respecto resulta imposible que se configure una figura de tratamiento indebido de datos, razón suficiente para desestimar la demanda de autos.

Expresa que sobre ese punto, pretende la actora, según se desprende de su escrito que el mero hecho de ser su parte una empresa dedicada al tratamiento de datos personales la haría responsable de los perjuicio que alega haber sufrido.

Agrega que sin embargo, si como pretende la contraria el estatuto jurídico para resolver esta litis fuere efectivamente la Ley 19.628, se deberá atender a todo ese cuerpo legal y no sólo a las disposiciones que a la demandante le acomodan.

En consecuencia, se deberá poner atención a lo que señala el **artículo 2°** letra n que defino al “responsable del registro o banco de datos” como “la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal”.

Explica que, en la especie, el hecho denunciado es la supuesta comunicación de un cierto dato que la demandante califica como erróneo.

Agrega que para resolver a quien se debe efectuar la atribución de responsabilidad resulta ineludible resolver primero quien es, en este caso concreto, el responsable del registro o banco de datos. Sostiene que sin esa respuesta resulta jurídicamente inaceptable hacer ninguna imputación de responsabilidad por el supuesto tratamiento indebido de datos.



Señala que si el estatuto jurídico es, como pretende la contraria, la Ley de Protección de Datos, se pregunta si no habrá de tener aplicación las disposiciones del artículo 12 que señalan que el titular de los datos tiene derecho a exigir la eliminación o modificación de un dato determinado, cuando éste sea erróneo, inexacto, equívoco o incompleto y así se acredite?

Insistir en aplicar el estatuto invocado por el actor, es ella quien debe acreditar que el dato es erróneo, inexacto, equívoco o incompleto, ya que así lo dispone la ley en que se pretende amparar la demandante.

Respecto de la demanda subsidiaria de responsabilidad extracontractual dispone que, a pesar de lo extensa de la demanda, la contraria no destina una sola línea a señalar cuál es el hecho preciso, concreto y determinado que atribuye a su parte como “hecho ilícito”.

Agrega que si bien desde el apartado 17 la demandante desarrolla una larga exposición acerca de los elementos de la responsabilidad extracontractual refiriéndose pormenorizadamente a la capacidad, el daño, la imputabilidad y la relación causal, es lo cierto que no deuda un solo párrafo a señalar cuál es el hecho ilícito cometido por su parte y en virtud del cual estaría obligada a indemnizarla.

Continúa añadiendo que, tampoco en la primera parte de su libelo explica cuál sería éste, limitándose a señalar que “la vinculación de SINACOFI con esta acción deriva del hecho de ser el vehículo entre los Bancos y la SBIF”. Es decir, la propia demandante reconoce en su libelo que el actuar de su parte se reduce al de un mero medio de transmisión de los datos entre la fuente y el destino de los mismos.

Explica que pretender que su parte es responsable de los hechos discutidos en autos, a pesar de que la misma demandante le reconoce el carácter de mero vehículo es tan absurdo como pretender que el fabricante de un automóvil sea responsable de una colisión por el solo hecho de haber fabricado los automóviles.

SEPTIMO.- Que, la demandada Banco Santander Chile evacuó el trámite de **Dúplica**, señalando que, solicita tener por ratificados todos y cada uno de los argumentos desarrollados en su contestación de la demanda, los que llevan a rechazar la acción deducida en su contra.

Luego de realizar una breve síntesis de la réplica indica que, el hecho de contestar afirmando que el Banco Santander nunca informó la deuda por cartera vencida de \$251.102.000.- no implica ni permite inferir que con ello se intenta cubrirse las espaldas con los codemandados.



Explica que si afirma lo anterior se debe exclusivamente a que conforme a sus registros la única deuda vencida informada a la Superintendencia fue aquella proveniente del crédito por operaciones de comercio exterior otorgado a EMPRESAS NANDWANI el 19 de octubre del año 2007, notificándose la suma de: (i) \$416.825 en diciembre de 2008; (ii) \$400.900 en enero de 2009; y, (iii) \$387.899 en febrero de 2009, monto que variaba mes a mes por tratarse de una operación cursada en moneda extranjera.

Asevera que, el actor no puede extraer conclusiones antojadizas como las señaladas en su réplica del hecho que el Banco no haya sido quien incurrió en el error denunciado, ya que su parte acreditó tal circunstancia entregando todos los antecedentes que disponía en la tramitación del recurso de protección, entre los cuales se encontraba el FORMULARIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO documentos que certifica que sólo informaron como deuda directa vendida las sumas especificadas previamente.

En cuanto a la aplicación de la Ley N°19.628 expone que, para rebatir su argumento referido a la inaplicabilidad de esta normativa a las personas jurídicas, el demandante simplemente manifestó que el fallo citado aborda el voto de minoría, no obstante, no se hace cargo del argumento de fondo, cual es que la eventual morosidad de una empresa no constituye el objeto de protección de la Ley N°19.628 por lo que la normativa invocada no resulta aplicable a este caso. Vuelven a reiterar el fallo del Recurso de Protección Rol N°6337-2014.

En síntesis, reiteran que el Banco no sólo no infringió la Ley que regula la Protección de Datos Personales, dado que jamás envió la información publicada erróneamente, sino que además dicha normativa no resulta aplicable al caso, por cuanto la información que se alega como erróneamente difundida no se condice con el bien jurídico amparado por dicha ley.

Respecto a que sería correcto el régimen de responsabilidad civil extracontractual no obstante existir un contrato de cuenta corriente entre las partes. Si el banco hubiese informado erróneamente una deuda inexistente, ciertamente habría incumplido con una obligación derivada del contrato de cuenta corriente, dado que el mismo establece en diversas cláusulas el deber de un correcto manejo sobre los datos generados por el cuentacorrentista.

Pero indica que la discusión central de la causa se encuentra en una etapa previa, la que para estos efectos resulta determinante, a saber, la circunstancia de que el Banco ha acreditado suficientemente que información



entregó respecto del actor, siendo ésta del todo verídica, por lo que discutir sobre el estatuto aplicable es infructuoso, pues a estas alturas ya podrá advertir que su parte no tuvo injerencia alguna en los hechos denunciados.

Finalmente, en cuanto a los perjuicios demandados, asevera que la réplica solo ha venido a respaldar su posición referida a que no se indicó el monto solicitado a indemnizar, así como tampoco se entregó una base de cálculo para determinarla.

Añade que, la improcedencia de conceder los perjuicios alegados continua siendo patente, incluso luego de ser evacuada la réplica, ya que la indemnización de perjuicios solicitada por el actor cuyo monto no fue determinado por el petitorio de la demanda conforme el artículo 254 N°5 del CPC ni tampoco se hizo uso de la reserva del artículo 173 del CPC presenta deficiencias insalvables que no se han solucionado con el simple hecho de afirmar que los daños derivarían de un supuesto lucro cesante y un pretendido daño moral.

Concluyen reiterando que de ser efectivo que la actora sufrió los perjuicios alegados, ello habría sido una consecuencia directa de la negativa de terceros (Banco BCI y el Banco CorpBanca) le expresaron al momento de requerir un crédito, con lo cual el pretendido perjuicio en caso alguno podrá ser atribuido a su parte, toda vez que la actuación de dichas entidades no se encuentra bajo su esfera de responsabilidad.

OCTAVO.- Que, la parte **demandante** acompañó a estos autos los siguientes documentos, los que fueran aparejados a su presentación de medida prejudicial probatorio con la que se dio inicio a estos autos, y que reitera a fojas 287 de autos y que corresponden a los siguientes:

1. Copia de informe que contiene antecedentes comerciales y financieros de la compañía demandante “Empresas Nandwani Ltda” emitido el 26 de marzo de 2009 donde consta una cartera vencida por más de \$251.102.000.
2. Copia de carta de 2 de abril de 2009 emitida por el banco BCI por medio de la Subgerente de Banca Mediana y Gran Empresa, la Sra. Cristina Barría Cianferoni, donde se indica que no será posible operar en créditos mientras no se regularice la cartera vencida por M\$251.102 según el reporte de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de enero de 2009.
3. Copia de carta emitida por Banco CorpBanca de 27 de marzo de 2009 por medio del Agente de Banca Empresas de la Sucursal Punta Arenas, Sr. Cristián Concha, donde se señala que revisando la apertura de cartas de crédito la demandante presentada a dicho Banco, así como también está



pendiente de curso operación de crédito especial por \$400.000.000, por la existencia de cartera vencida con que figura la empresa en los informes que evacúa la SBIF.

4. Copia de carta emitida por el demandante con fecha 27 de marzo de 2009 dirigida al Banco Santander en la cual piden al banco aclarar la Deuda Directa Vencida que figura en su sistema, según documento que adjunto de 27 de marzo de 2009, deuda que figura en el sistema financiero.

5. Copia de carta de fecha 27 de marzo de 2009 emitida por la demandante dirigida al Banco Santander Santiago en la cual piden emitir un certificado diciendo que no tienen deudas vencidas con dicho banco con el fin de utilizarlo en otro banco de la plaza y arreglar así en parte, el error cometido por el Banco.

6. Copia documento en que figura cuadro que consigna Información de fecha enero de 2009 Rut 78795760 digito 9 nombre Empresa Nandwani Limitada deudor directo créditos comerciales 90 días o mas pero menos de 180 días 400900.-

7. Copia simple de la tramitación del recurso de protección presentado ante la Illma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, bajo el Rol 5440-2009, en contra del Banco Santander, por la existencia de una publicación por cartera vencida.

NOVENO.- Que, por su parte la demandada **Banco Santander Chile**, acompañó prueba documental en su presentación de fojas 185 de 15 de julio de 2015, fojas 189 de 28 de julio de 2015, fojas 213 de 6 de agosto de 2015, 15 de noviembre de 2016 fojas 228, consistente en:

1.- Formulario de Envío de Información al Sistema Financiero que contiene cuadro que consigna Información de fecha enero de 2009 Rut 78795760 digito 9 nombre Empresa Nandwani Limitada deudor directo créditos comerciales 90 días o mas pero menos de 180 días 400900.-

2.- Informe consulta por Rut de fecha 29 de abril de 2009, titulado "Banco Santander Chile- Empresas Nandwani Limitada RUT 78.795.760-9" emitido por el Sistema Nacional de Comunicación Financieras S.A SINACOFI entre otros antecedentes "el rut no presenta morosidad en Bancos y Financieras" .

3.- Informe de fecha 30 de abril de 2009, emitido por DICOM-Equifax, correspondiente a Empresa Nandwani Limitada, Rut 78.795.760-9.

4.- Certificado emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones de fecha 5 de diciembre de 2012.



5.- Copia de Respuesta emitida por Banco Santander Fiscalía de fecha 9 de julio de 2009 a Oficio N°1314/16 de junio de 2009 de la Itma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas en la causa Recurso de Protección N°27-2009, por la cual se informa al Sr. Presidente de dicha Itma. Corte las deudas vigentes informadas relativas a Empresas Nandwani Limitada corresponden a cuotas de una operación de comercio exterior denominada Carta de Crédito, suscrita el 19 de octubre de 2007, y copia de resolución recaída en ella.

6.- Copia Carta de Crédito celebrada entre Banco Santander y Empresas Nandwani de fecha 19 de octubre de 2007 adjuntada a respuesta referida en el numeral anterior.

7.- Certificado de abril de 2009 emitido por Banco Santander a Empresas Nandwani, acompañado por Banco Santander en la causa Recurso de Protección N°27-2009, por el cual se informa a Empresas Nandwani que no ha remitido y/o informado en el listado de “impagos mayores a 90 días y menores de 180 días” al mes de enero de 2009 la deuda nro M\$251.102 con la cual figura Empresas Nandwani Limitada..

8.- Impresión correspondiente Manual del Sistema de Información emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el que contiene las instrucciones a las deben atenderse los bancos para la preparación y envío a la SBIF de la información que les solicita, junto con las comunicaciones Carta Circular N°14/2009, N°2/2011, N°1/2013, N°6/2012, N°3410 y 3394/2007.

DECIMO.- Que, por su parte la demanda **Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras**, en los autos iniciales sobre sobre medida prejudicial probatoria, en presentación de 6 de diciembre de 2012 acompañó prueba documental consistente en:

1. Certificado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 5 de diciembre de 2012 en que indican que ellos tienen la obligación de mantener de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley General de Bancos, una información refundida y permanente sobre los deudores del sistema financiero, para uso exclusivo de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización. Agrega que, conforme a lo señalado, dicho organismo confecciona mes a mes el denominado Estado de Deudores el que contiene información sobre el endeudamiento de las personas en el sistema financiero y es elaborado sobre la base de datos entregados por las propias entidades financieras, y que dicho Estado no tiene información histórica. Añade que como Superintendencia mantiene de conformidad a al artículo 16 de la Ley General de Bancos, con fines de supervisión, numerosa información emitida de



los bancos respecto del endeudamiento de sus clientes, entre la que se encuentra información con similar contenido a la informada a través del Estado de Deudores. Conforme a ello, pueden acreditar que el 31 de enero de 2009 el Banco Santander-Chile sólo aparece informando a Empresas Nandwani Ltda. con deuda morosa de \$401.000.-

2. Copia simple de fecha 9 de julio de 2009 de oficio al Presidente de la Illtma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas de José Ignacio Cuesta E. Abogado Jefe Fiscalía Banco-Santander Chile donde se informa el Banco Santander en virtual del artículo 14 de la Ley General de Bancos informó a la SBIF las deudas que mantiene vigentes con dicha institución financiera la Empresa Nandwani Limitada. Donde se indica que las obligaciones informadas corresponden a cuotas de una operación de comercio exterior denominada Carta de Crédito suscrito el 19 de octubre de 2007 por el representante de la sociedad don Laju Nandwani Vaswani, en beneficio de MMC Chile S.A. y que desglosan según cuadro adjuntado.

UNDECIMO.- Que, asimismo, consta en autos se ofició al Boletín de Informaciones Comerciales cuya respuesta figura agregada a fojas 223, la da cuenta que dicho Boletín nunca ha registrado publicación alguna referida a Empresas Nandwani Limitada Rut 78.795.460-9, haciendo presente que el jueves 26 de marzo de 2009 no se editó el Boletín de Informaciones Comerciales por cuanto éste se publica todos los días martes de cada semana.

DUODECIMO.- Que, cabe señalar primeramente que según consta de los documentos acompañados, como del reconocimiento expreso efectuado por la demandante como por el demandado Banco Santander, el actor, Empresas Nandwani Limitada a la fecha de los hechos que motiva la demanda en análisis, era cliente del Banco Santander.

Asimismo de las probanzas reseñadas en los motivos precedentes y en especial según se desprende de los documentos agregados al cuaderno de medidas prejudiciales probatorias por la parte demandante, reiterados durante la tramitación de la causa principal, en especial el documento que en su parte superior se lee Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras titulado Antecedentes Comerciales y Financieros Rut 78.795.760-9 Razón Social Empresas Nandwani Limitada domicilio Errazuriz 853 ciudad Punta Arenas entre otros, consigna “vencida 251.102”, que se lee bajo la columna 01/2009 comercial 251.102, lo que se refrendado en cuadro que se adjunta obtenido desde la misma página y por la carta emitida con fecha Punta Arenas 2 de abril de 2009 por el Banco BCI subgerente Banca



Mediana y Gran Empresa, es dable tener por establecido que en la información financiera que en virtud del mandato legal contenida en el artículo 14 de la Ley General de Bancos comunica la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual Comisión para el Mercado Financiera a las instituciones financieras y bancarias sobre las cuales ejerce fiscalización conforme lo estatuye el artículo 2 de la citada ley, incluyó como deuda vencida de la demandante una suma de \$251.000.000.-

DECIMO TERCERO.- Que, en igual forma de la documental rendida en certificados singularizaos en los motivos precedentes, en especial aquellos emitidos por el Banco Santander y la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como de las copias de las respuestas e informes agregados al Recurso de Protección 27-2009 de la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, surge inequívocamente que la demandante no tenía como deuda vencida del Banco Santander la suma de \$251.000.000.- al mes de enero y febrero de 2009, por lo se desprende que la información contenida en el documento de la Superintendencia debe ser calificada de errónea. De igual manera queda establecido según se desprende de las sentencias dictadas por los respectivos superiores de justicia que conocieron del Recuso, como del Informe Dicom Equifax aparejado por la demandada Banco Santander, que al mes de abril de 2009 la información errónea ya había sido eliminada.

DECIMO CUARTO.- Que, necesario resulta señalar que el actor ha invocado en su pretensión indemnizatoria principal la responsabilidad legal establecida en el artículo 23 de la ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, pretensión frente a la cual los demandados han alegado su improcedencia atendida la calidad de persona jurídica que detenta la demandante de autos.

Al efecto necesario es tener presente lo dispuesto en el artículo 2° de la ley en comento en cuanto señala que *“Para los efectos de esta ley se entenderá por:* y agrega en su letra **f)** *Datos de Carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.... g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.*



Por otra parte, y en concordancia con las obligaciones impuestas por el artículo 1 de la ley 19.628, a quienes efectúen tratamiento de datos personales entre los que destaca el “ *respeto por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce*”., el artículo 2° ya citado en su letra ñ) dispone expresa y claramente que: “*Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.*”

DECIMO QUINTO.- Que, asimismo de la historia fidedigna de la ley 19.628 es posible desprender de varios de sus pasajes, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que el citado cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción personal como perteneciente o relativa a la persona natural.

Es en este sentido como se han pronunciado los tribunales superiores de justicia en forma mayoritaria, y así recientemente la Excm. Corte Suprema con fecha 3 de septiembre 2020 en causa rol 95024-2020 ha confirmado, conociendo recurso de apelación en Recurso de Protección, la sentencia dictada por la ltma Corte de Apelaciones de Puerto Montt Rol 971-2020 en que se ha señalado que la regulación legal que establece la protección de la vida privada se enmarca en la garantía constitucional sobre protección a la vida privada, que es propia de las personas naturales. En consecuencia, no siendo aplicable en la especie la normativa que establece la responsabilidad legal invocada por el actor para su pretensión indemnizatoria deducida por vía principal, necesario resulta desestimar la demanda interpuesta.

DECIMO SEXTO.- Que, en forma **subsidiaria**, fundada en los mismos hechos la demandante ha deducido demanda por normas de responsabilidad extracontractual del artículo 2314 y siguientes del Código Civil, sin diferencias en relación a los tres demandados en contra de quienes dirige su acción, por lo que habiéndose tenido por acreditados al tenor de la prueba, los hechos consignados en los motivos duodécimo y décimotercero, ellos resultan absolutamente insuficientes para acreditar la existencia de un delito o cuasidelito, toda vez si bien al tenor del mandato legal la información registrada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que sirve de sustento a la pretensión, debía ser proporcionada por el Banco Santander a través del sistema autorizado, en la especie la plataforma de SINACOFI, también demandada en autos, no se ha rendido prueba alguna que permita



desprender quien entre los obligados por la ley General de Bancos proporcione y/o incorpore la información errónea, ni menos la forma en que ello aconteció, por lo que no es posible determinar de manera alguna los requisitos esenciales para la procedencia de la responsabilidad extracontractual invocada, esto es culpa o dolo, como tampoco se acreditó de manera alguna otro de los presupuestos esenciales para la procedencia de una indemnización, cual es el daño, sin perjuicio de señalar este tribunal que el actor no precisó en su libelo la forma en que solicitaba la condena a una indemnización en relación a la pluralidad de demandados, ni el monto que solicitaba por dicho concepto a cada uno de los sujetos pasivos de su demanda, por lo que no dándose los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, se desestimará de igual manera la pretensión subsidiaria.

Y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1437, 2314, 1698 y siguientes del Código Civil; 144, 170, 254, 342 N° 2 y 3, 346, y 433 del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.628, se **declara:**

Que se desestima la demanda principal de fojas 1 y siguientes y la demanda subsidiaria deducida conjuntamente en lo principal, sin costas por estimar esta sentenciadora que ha tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular. Autoriza doña Ximena Díaz Guzmán, Secretaria Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Febrero de dos mil veintiuno**





Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>